

## Evidencias de la obligación # 5

Realizar seguimiento a los procesos de segunda instancia asegurando que las actuaciones se realicen en los plazos establecidos en la Ley para evitar la caducidad o el silencio administrativo.

Cuando el mismo caso tiene fallo con orden, nos vuelven a reasignar el caso para brindar el soporte de cumplimiento

### 6. Caso Sra. Yair Leonardo Fonseca Alfonso, Acción de Tutela 2026 – 10089

Fecha de asignación: Abril 30 de 2026.

SOLICITUD APOYO TECNICO ADMISION DE TUTELA 2026 – 10089 YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO RAD 100561 29/04/2026

[Resumir](#)

apoyojuridicoSGTH  
Para: Zanin Sua Sua  
CC: Ana Maria Lopez Coronado  
Jue 30/04/2026 10:55

Respondió el Jue 30/04/2026 16:07.

09AutoVincula.pdf  
130 KB

Cordial Saludo,

Se asigna por reparto, si se necesita insumo favor solicitarlo.


Término: 1 DIA (VENCE 30/04/2026)


Cuando nos remiten la solicitud del apoyo, siempre anexan el expediente judicial para revisar el fallo y anexos

SOLICITUD APOYO TECNICO FALLO ACCION DE TUTELA 2026 – 10089 YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO RAD 101184 4/5/2026 [Resumir](#)

Ocultar historial de mensajes

De: Juzgado 21 Laboral Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato21@cendoj.ramajudicial.gov.co>  
Enviado: Lunes, 4 de mayo de 2026 8:51  
Para: Daniel Mauricio Quiceno Arcila <dquicenoa@mintrabajo.gov.co>; yairfonseca13@gmail.com <yairfonseca13@gmail.com>; Notificaciones Tutelas <notificaciones.tutelas@mintrabajo.gov.co>; Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co>; Envío Acciones De Tutela <enviotutelas@mintrabajo.gov.co>; Daniel Mauricio Quiceno Arcila <dquicenoa@mintrabajo.gov.co>; Respuestas Judiciales <respuestasjudiciales@cncs.gov.co>; Notificaciones Judiciales – CNSC <notificacionesjudiciales@cncs.gov.co>  
Asunto: NOTIFICACIÓN SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA ACCIÓN DE TUTELA 2026 – 10089

 Rama Judicial  
Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá  
República de Colombia

 11001310502120261008900

¡URGENTE! NOTIFICACIÓN SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA ACCIÓN DE TUTELA 2026 – 10089

**ACCIONANTE**  
**YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO**

**ACCCIONADOS**  
MINISTERIO DE TRABAJO

**VINCULADOS**  
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC  
ASESOR, Código 1020, Grado 9, identificado con el Código OPEC No. 219179

[Mostrar el historial de mensajes](#)

**De:** Juzgado 21 Laboral Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato21@cendoj.ramajudicial.gov.co>  
**Enviado:** lunes, 4 de mayo de 2026 8:20  
**Para:** Daniel Mauricio Quiceno Arcila <dquiceno@mintrabajo.gov.co>; yairfonseca13@gmail.com <yairfonseca13@gmail.com>; Notificaciones Tutelas <notificaciones.tutelas@mintrabajo.gov.co>; Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co>; Envío Acciones De Tutela <enviotutelas@mintrabajo.gov.co>; Daniel Mauricio Quiceno Arcila <dquiceno@mintrabajo.gov.co>; Respuestas Judiciales

A

apoyojuridicoSGTH

Para: @ Zanin Sua Sua

CC: Ana Maria Lopez Coronado

Responder

Responder a todos

Reenviar

Lun 4/05/2026 11:09

Marca para seguimiento. Completado el 4/05/2026.

Respondió el Lun 4/05/2026 12:01.

Buenos días,

Se asigna por reparto.

Cordialmente,

**Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Jurídico**  
Subdirección de Gestión del Talento Humano  
Ministerio del Trabajo- Nivel Central Piso 5  
Carrera 7 # 31 – 10 Edificio Worktech Center II P. H. – WTC

Zanin Sua Sua

Responder

Responder a todos

Reenviar

Lun 4/05/2026 12:01

Entregado\_COMUNICACION...  
18 KB

13SentenciaTutela.pdf  
410 KB

NOMBRAMIENTO EN PERIO...  
953 KB

COMUNICACION RESOLUCI...  
1 MB

FALLOS - SENTENCIAS INFORMATIVAS Resumir

A

apoyojuridicoSGTH

Responder

Responder a todos

Reenviar

Jue 7/05/2026 12:53

Para: @ Zanin Sua Sua

Sentencia2026043.pdf  
Descargado

0010SentenciaTutela2026001...  
Descargado

FalloTutela202610056Hecho...  
Descargado

3 archivos adjuntos (728 KB)

Guardar todo en OneDrive - Ministerio del Trabajo

Descargar todo

Cordial Saludo Dr. Zanin,

De acuerdo con lo solicitado, me permito remitir 3 fallos informativos en los cuales usted realiza el apoyo tecnico respectivo.

Cordialmente,

**Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Jurídico**  
Subdirección de Gestión del Talento Humano  
Ministerio del Trabajo- Nivel Central Piso 5  
Carrera 7 # 31 – 10 Edificio Worktech Center II P. H. – WTC

## **6. FALLA:**

**PRIMERO:** AMPARAR el derecho fundamental de **petición** de la señora **Manuela Munera Amariles**, conforme a la parte motiva del presente fallo.

**SEGUNDO:** ORDENAR al **Ministerio del Trabajo**, a través de la **Subdirección de Gestión del Talento Humano**, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, responda de fondo la petición presentada por la accionante el 4 de marzo de 2026, en los términos establecidos en la parte motiva de la providencia.

En ese término, la respuesta deberá ser debidamente notificada a la dirección suministrada por la parte actora.

**TERCERO:** NEGAR las demás pretensiones de la tutela.

**CUARTO:** Por Secretaría, notificar el presente fallo en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1.991 y a los correos electrónicos:

[mmunera@mintrabajo.com.co](mailto:mmunera@mintrabajo.com.co)

[mmamariles@gmail.com](mailto:mmamariles@gmail.com)

[notificacionesjudiciales@cnsj.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cnsj.gov.co)

[notificaciones.tutelas@mintrabajo.gov.co](mailto:notificaciones.tutelas@mintrabajo.gov.co)

[sgarciac@mintrabajo.gov.co](mailto:sgarciac@mintrabajo.gov.co)

[notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co)

[comisiondepersonalnivelcentral@mintrabajo.gov.co](mailto:comisiondepersonalnivelcentral@mintrabajo.gov.co)



JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO  
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ  
-SECCIÓN TERCERA-

Bogotá D.C., 23 de abril de 2026

Jueza	:	Alejandra Villegas Martínez
Ref. Expediente	:	110013336036 2026-00135-00
Accionante	:	Manuela Munera Amariles
Accionado	:	Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) Ministerio del Trabajo

ACCIÓN DE TUTELA  
SENTENCIA

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a emitir fallo de primera instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora **Manuela Munera Amariles** en contra del **Ministerio del Trabajo** y la **CNSC**, por la que se pretende la protección de sus derechos fundamentales *de petición, debido proceso, acceso a cargos públicos y mérito*.

II. ANTECEDENTES

2.1 HECHOS Y PRETENSIONES

La accionante señaló que era funcionaria de carrera administrativa del Ministerio del Trabajo, en donde se desempeñaba como Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, grado 14, y participó en la modalidad de ascenso del concurso de méritos 2618 de 2024 convocado por dicha entidad.

Añadió que, superó todas las etapas del concurso de méritos y fue incluida en la lista de elegibles del cargo de Profesional Especializado 2028 grado 20, identificada con la OPEC 221183, lista cuya firmeza se configuró el 16 de febrero de 2026 mediante la Resolución 749 del 27 de enero de 2026, ocupando el lugar número 5 para proveer 2 vacantes.

El 4 de marzo de 2026 recibió respuesta a una petición inicial, en la cual el Ministerio del Trabajo le informó sobre los cargos ofertados en dicho concurso para el empleo de Profesional Especializado 2028 grado 20, con sus respectivas OPEC y condiciones.

Indicó que, no obstante, verificó la existencia de varias vacantes definitivas en cargos equivalentes del mismo empleo, correspondientes a las OPEC 219305, 219304, 219307 y 219317, las cuales no fueron provistas en su totalidad por inexistencia o insuficiencia de listas de elegibles, pese a encontrarse dentro del ámbito de aplicación del concurso.

Sostuvo la existencia de un derecho adquirido a ser nombrada y posesionada, al considerar que la lista de elegibles en la que figuraba se encontraba en firme y debidamente comunicada a la entidad, conforme al artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y a la jurisprudencia constitucional, en especial la Sentencia SU-913 de 2009.

Añadió que presentó una nueva petición el 4 de marzo de 2026 ante el Ministerio del Trabajo – Comisión de Personal Nivel Central – Subdirección de Talento Humano, en el que solicitó su nombramiento en uno de los cargos vacantes de Profesional Especializado 2028 grado 20, en aplicación del principio de mérito y del uso obligatorio de la lista de elegibles.

Señaló que, vencido el término, la entidad no emitió respuesta de fondo y oportuna, ni expidió acto administrativo de nombramiento.

Con sustento en lo anterior, solicitó amparar sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso a cargos públicos por mérito, confianza legítima e igualdad y, en consecuencia, se ordenara al Ministerio del Trabajo expedir acto administrativo de nombramiento en uno de los cargos vacantes que correspondían al empleo Profesional Especializado 2028 Grado 20.

## **2.2. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA**

Mediante auto del 9 de abril de 2026, se admitió la acción y se ordenó notificar a la CNSC y el Ministerio del Trabajo.

El 16 de abril de 2026, la accionante presentó escrito complementario de la tutela.

## **2.3. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

### **2.3.1 CNSC**

Expuso que la acción de tutela interpuesta por la señora Manuela Múnera Amariles resultaba improcedente, en la medida en que pretendía obtener un nombramiento en período de prueba sin ostentar posición meritoria en la lista de elegibles del empleo al que concursó, lo cual desbordaba las reglas constitucionales y legales que regían el sistema de mérito.

Sostuvo que la Comisión Nacional del Servicio Civil actuó conforme a la Constitución y la ley, pues aplicó correctamente las normas que regulaban los concursos públicos de méritos, sin que se evidenciara vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

Alegó que la acción de tutela no cumplía los requisitos generales de procedencia, específicamente los de inmediatez y subsidiariedad, dado que la accionante conocía su posición en la lista desde la publicación de esta y contaba con otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir los actos administrativos relacionados con el concurso.

Indicó que la presunta vulneración alegada no era actual ni inminente, ya que la situación jurídica de la accionante no había variado desde la conformación de la lista de elegibles, motivo por el cual no se acreditaba la necesidad de un amparo urgente.

Argumentó que no se configuró perjuicio irremediable alguno, puesto que la accionante no demostró la inminencia, gravedad, urgencia ni impostergabilidad del daño alegado, y además no tenía derechos adquiridos sino una mera expectativa, al no haber alcanzado un lugar equivalente al número de vacantes ofertadas.

Precisó que las reglas de la convocatoria constituían la ley del concurso y resultaban obligatorias tanto para la Administración como para los participantes, por lo que no podían ser modificadas para beneficiar a un concursante sin afectar los principios de igualdad, transparencia y mérito.

Resaltó que la Comisión Nacional del Servicio Civil carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no administraba la planta de personal del Ministerio del Trabajo ni ostentaba la facultad nominadora, siendo esta entidad la competente para realizar nombramientos y reportar vacantes.

Explicó que el uso de las listas de elegibles se encontraba estrictamente regulado por la ley y los criterios unificados vigentes, y que dichas listas solo podían utilizarse para proveer los empleos ofertados o aquellos que cumplieran los criterios de “*mismos empleos*” o “*empleos equivalentes*”, circunstancia que no se acreditó en el caso concreto.

Diferenció entre el derecho derivado del mérito y la mera expectativa, señalando que solo quienes ocupaban posiciones correspondientes al número de vacantes ofertadas tenían un derecho subjetivo al nombramiento, mientras que quienes se ubicaban en posiciones posteriores solo contaban con una expectativa condicionada.

Señaló que, tratándose de concursos en modalidad de ascenso, las listas de elegibles únicamente podían emplearse para las vacantes expresamente ofertadas bajo dicha modalidad, sin extenderse a nuevas vacantes, a fin de no vulnerar el principio de igualdad ni el límite legal del 30 % y concluyó que la accionante ocupó la posición quinta en la lista de elegibles para un empleo con únicamente dos vacantes, razón por la cual no adquirió derecho alguno a ser nombrada ni podía exigir el uso de la lista a su favor.

Solicitó, en consecuencia, negar las pretensiones de la acción de tutela y declarar la improcedencia del amparo frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil, al no existir vulneración de derechos fundamentales imputable a dicha entidad.

### **2.3.2 Ministerio de Trabajo**

Sostuvo el Ministerio del Trabajo que la acción de tutela carecía de objeto respecto del derecho fundamental de petición, por cuanto durante el trámite de la misma dio respuesta de fondo, clara, congruente y oportuna a la petición formulada por la accionante el 4 de marzo de 2026, mediante oficio radicado nro. 08SE2026420100000007032 del 14 de abril de 2026, comunicado el 15 de abril del mismo año.

Explicó que, en consecuencia, se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que la presunta vulneración alegada desapareció por una actuación voluntaria de la entidad antes de que se profiriera el fallo de tutela, circunstancia que tornaba improcedente el amparo solicitado.

Indicó que, si bien la accionante participó en el Proceso de Selección No. 2618 de 2024 y ocupó el quinto lugar en la lista de elegibles para el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 20, dicha ubicación no le confería un derecho inmediato al nombramiento, ni respecto de las vacantes ofertadas inicialmente ni frente a aquellas declaradas desiertas o surgidas con posterioridad.

Argumentó que el nombramiento en período de prueba solo podía efectuarse una vez se materializara la provisión efectiva de las vacantes convocadas, en estricto orden de mérito, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, lo cual impedía adoptar decisiones administrativas anticipadas.

Señaló que la Administración debía esperar el resultado de las aceptaciones, no aceptaciones, posesiones o renunciaciones de quienes antecederían a la accionante en la lista de elegibles, pues

únicamente a partir de dichos eventos se habilitaba el uso sucesivo de la lista, conforme a la regulación vigente y a los lineamientos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Recalcó que el Ministerio del Trabajo carecía de competencia para alterar, modificar o anticipar el uso de las listas de elegibles, toda vez que la conformación, administración y reglas de utilización de estas correspondían exclusivamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en virtud del principio constitucional de separación de funciones y la autonomía de dicho órgano.

Concluyó que el Ministerio del Trabajo no vulneró los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela, actuó dentro del marco constitucional y legal que regulaba la carrera administrativa y los procesos de selección, y, por tanto, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción y se exonerara a la entidad de toda responsabilidad.

## 2.4. ELEMENTOS PROBATORIOS.

- Petición del 4 de marzo de 2026.
- Memorando interno del 2 de marzo de 2026 del Ministerio del Trabajo.
- Resolución nro. 749 del 27 de enero de 2026.
- Resolución nro. 761 del 27 de enero de 2026.
- Resolución nro. 762 del 27 de enero de 2026.
- Resolución nro. 764 del 27 de enero de 2026.
- Resolución nro. 776 del 27 de enero de 2026.

## III. CONSIDERACIONES.

### 3.1. COMPETENCIA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 333 de 2021, este Despacho es competente para conocer y decidir el asunto.

### 3.2. PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en establecer en primer lugar si, la acción de tutela interpuesta por la señora **Manuela Múnera Amariles** resulta procedente en la medida que, se pretende la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, acceso a cargos públicos, mérito, confianza legítima e igualdad, presuntamente vulnerados por las accionadas, para establecer si i) le dieron respuesta de fondo a la petición del 4 de marzo de 2026 y ii) se habrían vulnerado los derechos alegados ante la falta de nombramiento en periodo de prueba en el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 20, en los cargos vacantes dentro de las OPEC 219305, 219304, 219307 y 219317 en el Ministerio del Trabajo.

Para resolver los anteriores cuestionamientos, el Despacho tendrá en cuenta los siguientes aspectos

#### 3.2.1 Subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política señala el carácter subsidiario de la acción de tutela:

*“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,*

*cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.*

*La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.*

*Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.*  
(...)”

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela consagrada como mecanismo de naturaleza subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales, no tiene entre sus fines desplazar a los jueces ordinarios del ejercicio de sus atribuciones, reiterándose que no procederá cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial.

En tal sentido, ha precisado que los medios alternos de defensa con que cuenta el interesado, tienen que ser idóneos para obtener la protección de sus derechos fundamentales con la urgencia que requiera cada caso particular, debiendo evaluarse los medios de defensa en el contexto particular, teniendo en cuenta las circunstancias específicas que afectan al peticionario, para así determinar si realmente existen alternativas eficaces de protección que hagan improcedente la tutela.

### **3.2.2. Inmediatez**

La acción de tutela debe ser presentada con cumplimiento del principio de inmediatez, so pena de ser declarada improcedente, toda vez que la finalidad de ese amparo constitucional es brindar una protección inmediata a los derechos amenazados o vulnerados. Lo anterior debido a que *“la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza”*<sup>1</sup>.

De todas formas, dicho principio no conlleva a la existencia de un término de caducidad, tal y como lo afirmó la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992, en la que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11<sup>2</sup>, 12<sup>3</sup> y 40<sup>4</sup> del Decreto Ley 2591 de 1991. La razón fundamental de esa decisión fue: *“la oposición entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse ‘en todo momento’”*<sup>5</sup>.

La inexistencia de un término de caducidad de la acción de tutela no implica que esta pueda interponerse en cualquier momento, dado que una de las características esenciales de este mecanismo de protección es el principio de inmediatez. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha sostenido, de manera reiterada y consistente, que la solicitud de amparo constitucional debe interponerse en un término oportuno, justo y razonable. En este sentido

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En este mismo sentido se pronunció esta Corporación en las sentencias T-001 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>2</sup> Decreto Ley 2591 de 1991, Artículo 11: “[l]a acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente”.

<sup>3</sup> Decreto Ley 2591 de 1991, Artículo 12: “[l]a caducidad de la acción de tutela no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación mediante otra acción, si fuere posible hacerlo de conformidad con la ley”

<sup>4</sup> La declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma se fundó en la unidad normativa con los artículos 11 y 12 declarados inconstitucionales. Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>5</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.



se ha pronunciado dicha Corporación en diversas sentencias<sup>6</sup>, entre esas en la SU-961 de 1999, en la que afirmó: “[s]i el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción”<sup>7</sup>.

Si bien, la CNSC consideró que no se cumplía con este requisito, debido a que la accionante conoció el resultado de la lista de elegibles desde el 27 de enero de 2026, su argumento no resulta aceptable, en tanto el Despacho considera que el tiempo transcurrido no es excesivamente amplio como para acudir a la acción de tutela.

#### **4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL**

##### **4.1 De la protección del derecho al debido proceso a través de la acción de tutela**

El artículo 29 de la Constitución Política, consagra expresamente el debido proceso para toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, describiendo el conjunto de garantías mínimas que conforman su núcleo esencial, al señalar que *“nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”*.

Así, ha referido la H. Corte Constitucional en Sentencia C-383 de 2000 que el derecho al debido proceso *“comprende una serie de garantías con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro que el debido proceso constituye un límite material al posible ejercicio abusivo de las autoridades estatales”*<sup>8</sup>

Conforme al marco jurisprudencial expuesto, es claro que el debido proceso se aplica a toda actuación tanto administrativa como judicial; luego, para que se entienda desconocido o vulnerado el aludido derecho constitucional, es necesario que se demuestre un verdadero y grave quebranto de las garantías constitucionales y de la normativa aplicable al caso en particular.

##### **4.2. Del reconocimiento del mérito y la igualdad como requisito para el acceso a cargos públicos**

Frente al reconocimiento del mérito y la igualdad como requisito para el acceso a cargos públicos se ha pronunciado la H. Corte Constitucional<sup>7</sup>, en los siguientes términos:

*“(…) 52. En el marco de la regulación de la función pública, como parte del componente institucional diseñado por el Constituyente de 1991, el artículo 125 de la Constitución contiene algunos de los mandatos aplicables a la relación entre el Estado y los servidores públicos, con el objetivo de procurar la satisfacción de los fines establecidos en el Preámbulo y en el artículo 2 de la Constitución, entre otros. En concreto, el artículo 125 establece (i) el*

---

<sup>6</sup> En este sentido, las sentencias T-526 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-016 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-692 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-905 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-1084 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-1009 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-792 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-825 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-243 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-594 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-189 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-299 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo; T-265 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-691 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-883 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-328 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre muchas otras.

<sup>7</sup> Corte Constitucional, Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

<sup>8</sup> Core Constitucional T-543 agosto 25 de 2017 M.P. Diana Fajardo Rivera.

*régimen de carrera como regla general de vinculación con el Estado, (ii) el concurso público como instrumento de clausura o cierre para acreditar el mérito cuando la Constitución o la ley no establezcan otro sistema de nombramiento, (iii) la obligación de satisfacer las condiciones y requisitos previstos en la ley como indicativos del mérito y las calidades personales, para el ingreso y ascenso en el régimen de carrera, y la garantía de que el retiro del servicio se produce por calificación insatisfactoria, violación al régimen disciplinario y las demás causales constitucionales y legales, y (iba) la prohibición de que la filiación política influya en el nombramiento, ascenso o remoción de un empleado de carrera.*

*53. A partir de tales contenidos, es válido afirmar que el Constituyente de 1991 consideró como elemento fundamental del ejercicio de la función pública el principio del mérito y que previó a la carrera, sistema técnico de administración del componente humano, como un mecanismo general de vinculación; en el marco del cual el concurso público se constituye en un instrumento adecuado para que, bajo parámetros objetivos, no discriminatorios, transparentes y claros, se garantice la selección de las personas mejor cualificadas integralmente. Además, fijó aspectos normativos precisos sobre las excepciones al régimen de carrera y los criterios relevantes para el ingreso, ascenso y desvinculación del servicio, y reservó otros al margen de configuración del Legislador, habilitación que debe leerse en concordancia con lo establecido en el artículo 150.23 de la Constitución y, en todo caso, con aquellos límites sustantivos que derivan de la Carta Política.*

*54. Entre aquellos aspectos reservados a la configuración legislativa está la estipulación de los requisitos y condiciones para determinar el mérito y las calidades de los aspirantes al ingreso y ascenso a los cargos de carrera. Sobre el ascenso, y la razonabilidad y proporcionalidad de que existan disposiciones diferenciales, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades, evidenciando una primera etapa en la que el concurso de ascenso cerrado fue considerado válido dentro de nuestra configuración constitucional. No obstante, a partir del 2002 la Corporación varió su jurisprudencia, dando lugar a una segunda etapa, en vigencia de la cual ha proscrito la existencia de concursos cerrados, fundamentalmente en protección del principio de igualdad, y ha permitido configuraciones mixtas. A continuación, se reconstruirá esta jurisprudencia.”*

De conformidad con la jurisprudencia precedente, se tiene que el acceso a los cargos públicos, debe estar precedido de un proceso no discriminatorio, transparente, claro y que garantice la igualdad en la selección de las personas mejores cualificadas para los empleos.

5. CASO CONCRETO

En el presente asunto, se encuentra acreditado que la señora **Manuela Munera Amariles** participó del concurso de méritos Selección de Entidades del Orden Nacional nro. 2618 de 2024, en la modalidad de ascenso para el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 20 OPEC 221183 en el Ministerio de Trabajo, y conforme a la Resolución Nro. 749 del 27 de enero de 2027 ocupó la posición nro. 5 para proveer 2 vacantes:

**ARTÍCULO PRIMERO. Conformar y adoptar** la Lista de Elegibles para proveer dos (2) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 2028, Grado 20, identificado con el Código OPEC No. 221183 perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Ministerio del Trabajo en el marco del Proceso de Selección No. 2618 de 2024, así:

POSICIÓN	DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	PUNTAJE
1	38595844	CLAUDIA LORENA	ZUÑIGA MARTINEZ	84.51
2	1128431791	JORGE EDUARDO	GOMEZ RICO	81.31
3	1038612198	JORGE MARIO	ÁLVAREZ BUITRAGO	79.55
4	1053785194	SANDRA LUCIA	SERNA MARTINEZ	78.54
5	1017157269	MANUELA	MÚNERA AMARILES	73.29
6	93396523	FERNANDO FABIAN	BERMEO ESCOBAR	70.91
7	66783898	DIANA LORENA	PEÑA BAENA	70.90
8	14638215	JHON ALEXANDER	ABADIA CASTILLA	69.16

La accionante manifestó que, según la información suministrada por el Ministerio del Trabajo como respuesta a una petición inicial, constató que existían 6 vacantes del empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 20 declaradas desiertas, así: **OPEC 219305**, de las cuales se encontraban 2 vacantes disponibles; **OPEC 219304**, de las cuales se encontraba 1 vacante disponible; **OPEC 219307**, de las cuales se encontraba 1 vacante disponible y **OPEC 219317**, de la cual se encontraban 2 vacantes disponibles.

Según argumentó, tenía derecho a ser nombrada y posesionada en uno de los cargos vacantes, lo que fue solicitado en petición del 4 de marzo de 2026, a la que no había recibido respuesta.

De la anterior situación alegó (i) una vulneración de su derecho fundamental de petición, en la medida en que no había recibido respuesta a la petición radicada el 4 de marzo de 2026, y (ii) una vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a cargos públicos, mérito, confianza legítima e igualdad por la falta de nombramiento en las OPEC solicitadas.

En cuanto al derecho fundamental de petición, se encuentra demostrado que fue radicada una petición con fecha del 4 de marzo de 2026, por lo que, en virtud de la Ley 1437 de 2011, la entidad contaba con quince (15) días hábiles para pronunciarse con respecto a la solicitud de la parte actora. Dicho término expiró el **26 de marzo de 2026**.

En cuanto al contenido de la misma, se advierte que la accionante solicitó:

***“EMITIR ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA a mi nombre en el cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 20 en las siguientes OPEC de modalidad ascenso, o en un cargo equivalente con vacancia en la entidad:***

***OPEC 219305, de las cuales se encuentran 2 vacantes disponibles.***

***OPEC 219304, de las cuales se encuentra 1 vacante disponible.***

***OPEC 219307, de las cuales se encuentra 1 vacante disponible.***

***OPEC 219317, de las cuales se encuentran 2 vacantes disponibles.***

***De no ser posible lo anterior, indicar las razones de hecho y de derecho por las cuales no se accede a la solicitud.”***

Dicha petición fue contestada el 14 de abril de 2026, mediante radicado nro. 08SE2026420100000007032 que fue comunicado el 15 de abril del mismo año, en el que el Ministerio de Trabajo informó que, se encontraba adelantando el trámite del proceso de provisión de vacantes, y hasta tanto no culminara no era posible acceder a su petición.

En su respuesta el Ministerio de Trabajo señaló:

***“Descendiendo al caso concreto, y en atención a la solicitud formulada por el peticionario en ejercicio del derecho de petición, se precisa que, si bien el Ministerio de Trabajo reportó vacantes en el marco de la convocatoria correspondiente al Proceso de Selección No. 2618 de 2024, y que algunas de estas fueron declaradas desiertas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cierto es que, a la fecha, no ha culminado la provisión definitiva de las vacantes inicialmente ofertadas, en la medida en que la Entidad continúa adelantando las actuaciones administrativas necesarias para su debida provisión.***

***En efecto, actualmente se están desarrollando las gestiones correspondientes a la programación y realización de las audiencias públicas de escogencia de vacantes, así como aquellas orientadas a la verificación de las situaciones administrativas de los empleos que se encuentran provistos en encargo y en provisionalidad, particularmente en lo relacionado con la aplicación de las medidas de protección previstas en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto No.***

*1083 de 2015. Dichas actuaciones resultan necesarias y obligatorias, en la medida en que garantizan que la provisión definitiva de los empleos se realice con pleno respeto del orden jurídico y de los derechos de los servidores involucrados.*

*Bajo este contexto, es importante señalar que hasta tanto no se realice la provisión efectiva de las vacantes convocadas mediante el uso de la lista de elegibles en estricto orden de mérito, no es posible determinar con certeza el comportamiento o movimiento de dichas listas. Lo anterior, por cuanto esa partir de la materialización de los nombramientos y de las eventuales aceptaciones, no aceptaciones, posesiones o renunciaciones, que se habilita el uso sucesivo de la lista conforme a las reglas previstas en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y en la reglamentación expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC.*

*(...)*

*en conclusión, mientras no se culmine la provisión efectiva de las vacantes inicialmente convocadas, no se materialicen los nombramientos correspondientes, ni se determinen las condiciones para el eventual uso sucesivo de la lista (incluyendo la autorización previa de la Comisión Nacional del Servicio Civil para empleos iguales o equivalentes), no es posible expedir un acto administrativo de nombramiento a favor del peticionario, ni anticipar decisiones sobre vacantes específicas, por tratarse de actuaciones regladas sujetas a condiciones legales y procedimientos aún en curso.”*

Si bien se advierte una respuesta formal, para el Despacho, la misma no es de fondo, particularmente porque en ella se omite pronunciarse de forma individual frente a la posibilidad de nombramiento en cada una de las vacantes correspondientes a las OPEC sobre las que se solicitó información.

Asimismo, no se especifica cuáles son las vacantes que están en proceso de provisión, y si ellas se relacionan con las OPEC planteadas por la accionante en su petición, en las cuales, dicho sea de paso, se declararon desiertas algunas.

En efecto, es necesario tener presente que, sobre las características de la respuesta de fondo, en sentencia T-230 de 2020, la Corte Constitucional manifestó:

*“4.5.4. Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación a los derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente.”*

Ello resulta determinante, en tanto, la accionante solicitó información específica sobre el nombramiento en cada una de las OPEC relacionadas en la petición, sin embargo, recibió información general, que no atendió directamente a cada uno de los puntos planteados en la petición.

Es así como el Despacho amparará el derecho fundamental de petición de la señora Manuela Múnera Amariles para que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, el Ministerio del Trabajo resuelva de fondo la petición

del 4 de marzo de 2026, y se refiera de manera particular a cada una de las OPEC sobre las que se presentó la petición.

En la medida en que el Ministerio del Trabajo no ha emitido respuesta de fondo frente a la solicitud elevada por la accionante, en el sentido de ser nombrada o no en las OPEC solicitadas, se desprende que, a la fecha, no existe una vulneración de los demás derechos invocados, pues no se ha establecido la procedencia o no de su nombramiento frente a las OPEC relacionadas.

Como precisión final, se indica que, en caso de inconformidad con la respuesta que emita el **Ministerio del Trabajo** en cumplimiento de la orden aquí impartida, así como las actuaciones administrativas relacionadas con los hechos relatados en la petición, deberán debatirse a través de los medios ordinarios de defensa judicial, puesto que, en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela no fue creada para desplazar del conocimiento a los jueces con competencia para resolver determinadas controversias.

Finalmente, en lo que respecta al derecho a la **igualdad**, el Despacho no encuentra ninguna vulneración por parte de la accionada, pues no se estableció comparación con otras personas en similares condiciones o se encontró alguna situación discriminatoria en los hechos de la acción ni en la conducta de la accionada.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

## 6. FALLA:

**PRIMERO: AMPARAR** el derecho fundamental de **petición** de la señora **Manuela Munera Amariles**, conforme a la parte motiva del presente fallo.

**SEGUNDO: ORDENAR** al **Ministerio del Trabajo**, a través de la **Subdirección de Gestión del Talento Humano**, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, responda de fondo la petición presentada por la accionante el 4 de marzo de 2026, en los términos establecidos en la parte motiva de la providencia.

En ese término, la respuesta deberá ser debidamente notificada a la dirección suministrada por la parte actora.

**TERCERO: NEGAR** las demás pretensiones de la tutela.

**CUARTO:** Por Secretaría, notificar el presente fallo en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1.991 y a los correos electrónicos:

[mmunera@mintrabajo.com.co](mailto:mmunera@mintrabajo.com.co)

[mmamariles@gmail.com](mailto:mmamariles@gmail.com)

[notificacionesjudiciales@cns.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cns.gov.co)

[notificaciones.tutelas@mintrabajo.gov.co](mailto:notificaciones.tutelas@mintrabajo.gov.co)

[sgarcia@mintrabajo.gov.co](mailto:sgarcia@mintrabajo.gov.co)

[notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co)

[comisiondepersonalnivelcentral@mintrabajo.gov.co](mailto:comisiondepersonalnivelcentral@mintrabajo.gov.co)

**QUINTO:** En firme la presente providencia y en el evento en que no fuere impugnada, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

**SEXTO:** Se informa a todos los sujetos procesales que la radicación de memoriales, consulta de expedientes y demás trámites a adelantar en relación con los procesos de conocimiento de este Despacho, se atenderán únicamente a través de la Ventanilla Virtual dispuesta en el aplicativo SAMAI, al que podrán acceder en el siguiente enlace:

<https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/>

Para mayor información consultar:

<https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/Wayuda.aspx>

Para solicitar acceso a consulta de expediente deberá adelantarse el trámite sugerido en el siguiente enlace

<https://www.consejodeestado.gov.co/manuales/manualsujetos/knowledge-base/ventanilla-virtual/>

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ALEJANDRA VILLEGAS MARTÍNEZ**

**Jueza**

(firmado electrónicamente)

Nmma



FECHA:	TREINTA (30) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).
REFERENCIA:	ACCIÓN DE TUTELA No. 110013105021 <b>20261008900</b>
ACCIONANTE:	YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO
ACCIONADA:	MINISTERIO DE TRABAJO
VINCULADOS	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC.

Siendo competente este Juzgado para conocer de la presente acción por la entidad en contra de la cual se dirige, se procede a emitir pronunciamiento de fondo.

ANTECEDENTES

**YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO**, en nombre propio, presenta acción de tutela<sup>1</sup> en contra del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, invocando la protección de sus derechos fundamentales de petición, trabajo, igualdad, debido proceso administrativo y acceso a cargos públicos por mérito, con ocasión del trámite de nombramiento en período de prueba derivado del Proceso de Selección No. 2618 de 2024 Ministerio del Trabajo.

Como sustento de su pedimento relató que participó en el referido proceso de selección, en la modalidad correspondiente, para el empleo denominado ASESOR, Código 1020, Grado 9, identificado con el Código OPEC No. 219179; que ocupó la posición número dos (2) dentro de la lista de elegibles, con un puntaje de 83.05; que, mediante Resolución No. 1160 del 9 de febrero de 2026, la Comisión Nacional del Servicio Civil conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer dos (2) vacantes definitivas del empleo ASESOR, Código 1020, Grado 9, OPEC No. 219179, perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Ministerio del Trabajo, dentro del Proceso de Selección No. 2618 de 2024, donde la señora NATALY RODRÍGUEZ JARAMILLO ocupó la primera posición y él la segunda; que, la lista de elegibles se encontraba en firme y que, pese a ello, el Ministerio del Trabajo no ha expedido a su favor el acto administrativo de nombramiento en período de prueba dentro de los diez (10) días hábiles siguientes y en estricto orden de mérito por lo que elevó derecho de petición ante el Ministerio del Trabajo, solicitando su nombramiento sin recibir respuesta, pese a que la primera persona de la lista, ya fue nombrada en período de prueba, , de ahí que solicita que se ordene al Ministerio del Trabajo expedir el acto administrativo de nombramiento en período de prueba.

<sup>1</sup> Archivo Digital: 01DemandaAnexos.pdf

PSMS 202610089





## ACTUACIONES PROCESALES SURTIDAS EN ESTA INSTANCIA

La presente acción de tutela fue admitida mediante proveído del 20 de abril de 2026<sup>2</sup>, oportunidad en la cual el Despacho dispuso admitir la tutela formulada por el señor **YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO** en contra del **MINISTERIO DEL TRABAJO** y vincular a la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, como tercero con interés legítimo, para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción. En el mismo auto se requirió a las entidades para que indicaran el responsable directo y su superior jerárquico en caso de impartirse alguna orden de tutela.

La Comisión Nacional del Servicio Civil<sup>3</sup> allegó informe el veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026). En su respuesta solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que sus competencias dentro del concurso culminan con la conformación y firmeza de las listas de elegibles, mientras que el nombramiento en período de prueba, la posesión y las demás actuaciones de administración de la planta de personal corresponden a la entidad nominadora, esto es, al Ministerio del Trabajo. No obstante, informó que la lista de elegibles fue publicada el veinte (20) de febrero de 2026, cobró firmeza total el dos (2) de marzo de 2026 y que dicha firmeza fue comunicada al Ministerio del Trabajo mediante oficio No. 2026RS037693 de la misma fecha.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo allegó contestación el veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis (2026)<sup>4</sup>, en la que indicó que el accionante participó en el Proceso de Selección No. 2618 de 2024 para el empleo ASESOR, Código 1020, Grado 9, OPEC No. 219179, y aceptó que, mediante Resolución No. 1160 del 9 de febrero de 2026, la CNSC conformó la lista de elegibles en la cual el actor ocupó la segunda posición con puntaje de 83.05, sin embargo, el nombramiento no opera de manera automática ni inmediata, pues deben adelantarse las etapas propias del procedimiento administrativo de provisión de empleos públicos; además que, mediante Oficio No. 08SE2026420100000019356 del veintidós (22) de abril de 2026<sup>5</sup> dió respuesta al derecho de petición elevado por el accionante, razón por la cual solicitó declarar configurado un hecho superado respecto de esa garantía; y pidió negar las demás pretensiones y abstenerse de impartir órdenes de hacer o no hacer relacionadas con el concurso de méritos.

<sup>2</sup> Archivo digital: 03AutoAdmiteTutela.pdf

<sup>3</sup> Archivo digital: 05RespuestaCnsc.pdf

<sup>4</sup> Archivo digital: 06ContestacionMinisterioTrabajo.pdf

<sup>5</sup> Archivo digital: 07ContestaciónMinisterioTrabajo.pdf- Folio (104)





El veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026), el accionante insistió en que la entidad accionada ha dilatado el trámite de nombramiento, cuestionó la respuesta suministrada y reiteró que la lista de elegibles se encuentra en firme, que fue comunicada a la entidad nominadora y que han transcurrido los términos previstos en el Decreto 1083 de 2015 sin que se haya expedido su nombramiento en período de prueba.

Finalmente, por auto del veintiocho (28) de abril del dos mil veintiséis (2026)<sup>6</sup>, esta juzgadora ordenó la vinculación de las personas que actualmente se encuentren nombradas, posesionadas o ejerciendo el empleo denominado ASESOR, Código 1020, Grado 9, identificado con el Código OPEC No. 219179, dentro del Proceso de Selección No. 2618 de 2024 – Ministerio del Trabajo, para lo cual requirió al Ministerio del Trabajo, quien, vencido el término concedido, no remitió constancia, soporte o evidencia alguna del cumplimiento de dicha orden.

Tramitado el asunto en estas condiciones y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el Despacho a proferir el fallo respectivo, previa las siguientes,

### CONSIDERACIONES

La acción de tutela fue establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad de salvaguardar los derechos de carácter fundamental, correspondiéndole al Juez de Tutela velar por la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales que puedan resultar vulnerados o amenazados en determinado momento. Es conveniente recordar que proteger una situación mediante dicha acción constitucional genera, para el fallador, la responsabilidad de tener absolutamente claro que de por medio hay una violación lo suficientemente grave como para que se afecte el concepto de persona como entidad moral y de respeto, cuando advierte violación, quebrantamiento o amenaza a los derechos fundamentales del accionante.

Adicionalmente, la H. Corte Constitucional, dentro de su pacífica jurisprudencia, ha manifestado que esta acción es un instrumento judicial de carácter constitucional, residual y subsidiario al que se acude, en últimas, para remediar o evitar un perjuicio irremediable, o cuando no exista

---

6 Archivo digital: 09AutoVincula



otro medio de defensa judicial, más no una instancia respecto de los derechos reclamados.

## DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Para comenzar, debe señalarse que la tutela es una acción especialísima frente a la que el legislador estableció unos presupuestos específicos para que proceda, los que deben ser examinados previamente por todos los funcionarios judiciales en la medida que únicamente cuando se encuentren éstos reunidos es posible efectuar el pronunciamiento de fondo sobre los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita, pues de lo contrario solo hay lugar a declarar improcedente la acción. Requisitos contenidos en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que enseña: “(...) *CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. 3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho. 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto (...)*”.

Y es que si bien la acción de tutela es una herramienta procesal preferente, informal, sumaria y expedita que pretende el amparo de los derechos fundamentales de una persona que se ven vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o particular, su amparo debe estar precedido de los siguientes presupuestos: (i) legitimación por activa; (ii) legitimación por pasiva; (iii) trascendencia iusfundamental del asunto; (iv) agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad); y (v) la evidente afectación actual de un derecho fundamental (inmediatez).

## DEL CASO CONCRETO

En el caso de marras corresponde establecer si el **MINISTERIO DEL TRABAJO** está vulnerando los derechos fundamentales de petición, debido proceso administrativo, igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos por mérito del señor **YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO**, al presuntamente no haber emitido respuesta oportuna, clara y de fondo frente a la solicitud de nombramiento en período de prueba elevada por el actor el 14 de marzo



de 2026 y, adicionalmente, al no haber expedido el acto administrativo de nombramiento en período de prueba para el empleo denominado ASESOR, Código 1020, Grado 9, identificado con el Código OPEC No. 219179, pese a ocupar la segunda posición dentro de la lista de elegibles conformada por intermedio de la Resolución No. 1160 del 9 de febrero de 2026.

A partir de tales imputaciones, el accionante pretende, de un lado, el amparo del derecho fundamental de petición y, de otro, la protección de los derechos al debido proceso, al trabajo, igualdad, no discriminación y principio constitucional del mérito, solicitando que se ordene al Ministerio del Trabajo expedir y comunicar el acto administrativo de nombramiento en período de prueba para el cargo objeto del concurso.

En ese orden, el análisis constitucional debe diferenciar dos planos, el primero corresponde a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, aspecto que exige verificar la existencia de la solicitud, su fecha de radicación, la respuesta emitida por la entidad y su notificación. El segundo se relaciona con la controversia sustancial sobre la eficacia de la lista de elegibles en firme y la obligación de la entidad nominadora de producir el nombramiento en período de prueba, asunto que compromete el debido proceso administrativo, el mérito, la igualdad y el acceso a cargos públicos.

Aclarado lo anterior, como la H. Corte Constitucional ha determinado que dentro del ordenamiento jurídico no existe otro mecanismo, diferente a la tutela, que permita salvaguardar el derecho fundamental de petición, es por lo que esta acción constitucional se convierte en la única vía que tiene el peticionario para buscar conjurar la situación que lo amenaza, mostrándose por tanto esta acción procedente para la determinación de la eventual vulneración del derecho del actor, en orden a lo cual se adentrara al estudio de fondo.

**Del Derecho de Petición para que se efectúe un nombramiento en aplicación del principio constitucional del mérito, la carrera administrativa y el acceso a cargos públicos**

Frente al derecho fundamental de petición, advierte el Despacho que el accionante afirmó haber presentado el catorce (14) de marzo de dos mil

PSMS 202610052

Carrea 7ª 30A 02/10 EdIf. San Martin Piso 1  
Teléfono: 601 353 2666 Ext. 71521  
Línea Gratuita: 018000 110 194  
jlato21@cendoj.ramajudicial.gov.co



veintiséis (2026) solicitud ante el MINISTERIO DEL TRABAJO, encaminada a obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento en período de prueba para el empleo denominado ASESOR, Código 1020, Grado 9, identificado con el Código OPEC No. 219179, y sostuvo que, para la fecha de presentación de la acción constitucional, no había recibido respuesta ni había sido notificado del acto de nombramiento correspondiente.

En tal sentido, aunque el Ministerio del Trabajo, mediante informe remitido al Despacho el veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis (2026), allegó contestación a la acción constitucional, reconociendo que el accionante hace parte de la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. 1160 del 9 de febrero de 2026, expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el empleo denominado ASESOR, Código 1020, Grado 9, identificado con la OPEC No. 219179, sostuvo que la materialización del nombramiento no opera de manera automática ni inmediata, sino que debe surtir las etapas propias del procedimiento administrativo de provisión de empleos públicos; y que durante el trámite de tutela dio respuesta al derecho de petición mediante oficio No. 08SE2026420100000019356 del veintidós (22) de abril de dos mil veintiséis (2026)<sup>7</sup>, allegando como anexos la respuesta emitida, la constancia de entrega y el correo de remisión.

Respecto al derecho de petición, rememórese que aquél se encuentra previsto en el artículo 23 de la C.P., consagrándose allí la posibilidad que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, y a obtener una pronta respuesta.

La H. Corte Constitucional desde un principio ha mencionado un criterio pacífico y unificado, en torno a que el derecho de petición se satisface, solo en la medida en que la respuesta que se suministre desate el fondo de la solicitud, guardando congruencia frente al objeto de la misma y siempre que la misma se suministre, dentro del término legal que previó el legislador, así lo señaló en sentencia T-230 del 2020, estableciendo que:

***“Caracterización del derecho de petición. El artículo 23 de la Constitución dispone que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.” Esta garantía ha sido denominada derecho fundamental de petición, con el cual se promueve un canal de diálogo***

---

<sup>7</sup> Archivo Digital: Archivo digital: 07ContestaciónMinisterioTrabajo.pdf- Folio (104)



entre los administrados y la administración, “cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho”. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta garantía tiene dos componentes esenciales: (i) la posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades, y como correlativo a ello, (ii) la garantía de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz, oportuna y congruente con lo solicitado. Con fundamento en ello, su núcleo esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.

**Formulación de la petición.** En virtud del derecho de petición cualquier persona podrá dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades, ya sea verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio idóneo (art. 23 CN y art. 13 CPACA). En otras palabras, la petición puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas, siendo, en muchas ocasiones, una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos administrativos. Estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas y responderlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido, de acuerdo con los estándares establecidos por la ley.- En tratándose de autoridades judiciales, la solicitud también es procedente, siempre que el objeto del requerimiento no recaiga sobre procesos judiciales en curso.

Las peticiones también podrán elevarse excepcionalmente ante organizaciones privadas. En los artículos 32 y 33 de la Ley 1437 de 2011, modificados por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, se estipula que cualquier persona tiene el derecho de formular solicitudes ante entidades de orden privado sin importar si cuentan o no con personería jurídica, cuando se trate de garantizar sus derechos fundamentales. En el ejercicio del derecho frente a privados existen iguales deberes de recibir, dar trámite y resolver de forma clara, oportuna, suficiente y congruente, siempre que sean compatibles con las funciones que ejercen. En otras palabras, los particulares, independientemente de su naturaleza jurídica, son asimilables a las autoridades públicas, para determinados efectos, entre ellos, el relacionado con el derecho de petición.

(...)

**Pronta resolución.** Otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición, consiste en que las solicitudes formuladas ante autoridades o particulares deben ser resueltas en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal efecto.

El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 dispone un término general de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud para dar respuesta, salvo que la ley hubiera determinado plazos especiales para cierto tipo de actuaciones. Esa misma disposición normativa se refiere a dos términos especiales aplicables a los requerimientos de documentos o información, y





a las consultas formuladas a las autoridades relacionadas con orientación, consejo o punto de vista frente a materias a su cargo. Los primeros deberán ser resueltos en los 10 días hábiles siguientes a la recepción, mientras que los segundos dentro de los 30 días siguientes.

**Respuesta de fondo.** Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación a los derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: "(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente" (se resalta fuera del original).

(...)

**Notificación de la decisión.** Finalmente, para que el componente de respuesta de la petición se materialice, es imperativo que el solicitante conozca el contenido de la contestación realizada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA. El deber de notificación de mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada.

(...)

**Formas de canalizar las peticiones.** El derecho de petición se puede canalizar a través de medios físicos o electrónicos de que disponga el sujeto público obligado, por regla general, de acuerdo con la preferencia del solicitante. Tales canales físicos o electrónicos pueden actuarse de forma verbal, escrita o por cualquier otra vía idónea que sirva para la comunicación o transferencia de datos.

Bajo tal entendido, una vez examinada detenidamente la respuesta brindada por el ente ministerial accionado es palmario que la misma no satisface los presupuestos de ley, en la medida que sólo se limita a explicar



que se encuentra adelantando los trámites correspondientes, sin precisar los mismos.

Al respecto vale la pena recordar que el artículo 125 de la Constitución Política consagra que los empleos en los órganos y entidades del Estado son, por regla general, de carrera, salvo las excepciones constitucionales o legales, y dispone que el ingreso y ascenso en tales cargos debe realizarse previo cumplimiento de los requisitos y condiciones fijados por la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. De allí que la carrera administrativa no constituya una simple forma de organización interna del empleo público, sino un instrumento constitucional orientado a garantizar la eficiencia de la administración, la igualdad de oportunidades, la transparencia, la imparcialidad y la prevalencia del mérito en el acceso al servicio público.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en Sentencia C-172 de 2021, precisó que el Constituyente de 1991 erigió el mérito como elemento fundamental del ejercicio de la función pública y concibió la carrera administrativa como el mecanismo general de vinculación al Estado, dentro del cual el concurso público permite seleccionar, bajo criterios objetivos, transparentes y claros, a las personas mejor cualificadas integralmente para el desempeño del empleo. En esa misma providencia, la Corte indicó que la carrera contribuye a que el Estado actúe con eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia, y que además incide de manera directa en derechos fundamentales como el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, la igualdad de oportunidades y la estabilidad laboral.

En igual sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia C-102 de 2022, reiteró que la carrera administrativa se encuentra fundada en el mérito como principio constitucional y como regla general para la provisión de cargos públicos, y que el concurso público constituye el mecanismo idóneo para hacer efectivo dicho principio. En esa oportunidad, la Corporación destacó que el mérito es un criterio rector del acceso a la función pública y una garantía frente a criterios extraños a la capacidad, idoneidad y calidades de los aspirantes.

A su vez, en la Sentencia SU-067 de 2022, la Corte Constitucional señaló que el mérito es un principio constitucional de indiscutible importancia, en tanto otorga sentido al sistema de carrera administrativa. Preciso que el concurso de méritos es el mecanismo que permite evaluar, con garantías de



objetividad e imparcialidad, la idoneidad y competencia de quienes aspiran a ejercer funciones públicas, razón por la cual debe ser utilizado como regla general para la vinculación de servidores al Estado. En dicha providencia también se recordó que la convocatoria constituye la ley del concurso y que las actuaciones administrativas deben sujetarse rigurosamente a las reglas previamente fijadas, so pena de vulnerar el debido proceso, la igualdad y la buena fe.

**De lo anterior se sigue que el concurso de méritos no es una actuación meramente formal, sino el procedimiento constitucionalmente previsto para materializar el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. Por ello, una vez superadas las etapas del proceso de selección y conformada la lista de elegibles en firme, la administración queda vinculada por el orden de mérito, sin que pueda introducir exigencias, dilaciones o barreras no previstas en la Constitución, la ley, el reglamento o la convocatoria.**

En esa línea, la lista de elegibles constituye una fase cualificada del concurso, pues refleja el resultado objetivo de la valoración de los aspirantes y determina el orden en que deben proveerse las vacantes ofertadas. Así, cuando el aspirante se encuentra ubicado dentro del número de vacantes convocadas y la lista se encuentra en firme, la entidad nominadora no puede desconocer los efectos jurídicos del concurso ni diferir indefinidamente el nombramiento en período de prueba bajo argumentos genéricos de trámite interno.

Por consiguiente, si la lista de elegibles fue comunicada a la entidad nominadora, se encuentra en firme, existe vacante definitiva ofertada y el aspirante ocupa una posición que le permite acceder al empleo, la omisión injustificada de expedir el nombramiento en período de prueba compromete el principio constitucional del mérito y puede vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad, trabajo y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. En tales eventos, la intervención del juez constitucional no reemplaza a la administración, sino que asegura que esta cumpla las consecuencias jurídicas de un concurso de méritos culminado y respete el orden constitucional que gobierna la carrera administrativa.

Bajo tal orden argumentativo, en lo que interesa al derecho de petición elevado por el accionante, por sabido se tiene que éste no implica que la entidad receptora, deba, infaliblemente, acceder a las aspiraciones del petente; pues ese no fue el sentido que el constituyente quiso otorgarle





a este derecho fundamental, sino el de dar certeza, positiva o negativa, frente a una solicitud concreta, respuesta que para el *sub lite*, sólo se satisface con la expedición del acto administrativo correspondiente que resuelva de fondo la solicitud de nombramiento, bien de manera positiva a los intereses del petente, ora, de manera negativa en los términos y por las motivaciones que deben soportar la omisión o tardanza en el cumplimiento del anhelado nombramiento.

En efecto, descendiendo al contenido del derecho de petición, a todas luces es evidente que la respuesta brindada de ningún modo satisface lo peticionado y, sobre esa base mal puede considerarse un hecho superado, si en cuenta se tiene que los antecedentes en los que se soporta tal solicitud se encuentran fuera de discusión por el ente Ministerial, esto es, **i)** que el accionante participó en el Proceso de Selección No. 2618 de 2024 – Ministerio del Trabajo, para el empleo denominado ASESOR, Código 1020, Grado 9, OPEC No. 219179, **ii)** que mediante Resolución No. 1160 del 9 de febrero de 2026 se conformó la lista de elegibles para proveer dos vacantes definitivas de dicho empleo y que el señor YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO ocupó la segunda posición con un puntaje de 83.05, **iii)** que la Comisión Nacional del Servicio Civil informó que las listas de elegibles del Proceso de Selección No. 2618 de 2024 fueron publicadas en el Banco Nacional de Listas de Elegibles el veinte (20) de febrero de 2026 y **iv)** que, respecto de los empleos frente a los cuales no se presentaron solicitudes de exclusión, se comunicó su firmeza al Ministerio del Trabajo mediante oficio No. 2026RS037693 del dos (2) de marzo de 2026, dentro de esa comunicación aparece relacionado el empleo OPEC No. 219179, denominado ASESOR, Código 1020, Grado 9, con dos vacantes.

De esa manera, el expediente permite establecer tres elementos relevantes para la decisión: primero, que el empleo ofertado corresponde a un cargo de carrera administrativa; segundo, que la lista fue conformada para proveer dos vacantes definitivas; y tercero, que el accionante ocupó la segunda posición dentro de esa lista. En consecuencia, el caso no se ubica en el escenario de quien pretende extender una lista a vacantes no ofertadas, ni de quien aspira a que el juez constitucional ordene un estudio técnico sobre equivalencias o uso adicional de listas, sino ante la situación de un elegible ubicado dentro del número de vacantes convocadas, desconociendo el Despacho las razones por las cuáles no ha sido atendida su solicitud de nombramiento, ya que la respuesta a él brindada no las consigna de manera clara y precisa, comportando con su omisión en la justificación o explicación debida una vulneración no sólo al derecho de petición sino, por extensión, al debido proceso.



En efecto, la H. C Constitucional ha puntualizado que el debido proceso, tratándose de un proceso judicial o administrativo, se vulnera por la configuración de: "(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora".

De tal suerte, el simple incumplimiento de un término establecido en la ley no implica *per se* la vulneración del derecho al debido proceso, pues para ello es necesario que tal dilación sea injustificada. En otras palabras, "cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso (...)", consideración que es plenamente aplicable en los casos de mora administrativa debido a que el artículo 29 constitucional establece la procedencia de este derecho fundamental en ambos escenarios. Circunstancia a la que se aúna el hecho de que la ausencia de términos legales no exime de responsabilidad a las autoridades de resolver los asuntos que les son planteados dentro de términos razonables, puesto que se tratan de actuaciones regidas por los principios de eficacia, economía y celeridad previstos en el artículo 209 de la Constitución.

En estos eventos, como es deber del operador judicial examinar las particularidades de cada caso para determinar si la complejidad del asunto, el estado del procedimiento, el impulso del interesado y la actividad de la entidad justifican o no la dilación, es por lo que es dable concluir en este asunto que no se encuentra razón o justificación en la respuesta brindada al actor por la cual no se le haya contestado de fondo su solicitud, máxime cuando en materia de concurso de méritos el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 establece expresamente que la convocatoria es la norma reguladora de todo concurso y "obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes". Allí se fijan las condiciones que deben cumplir los participantes y las reglas que auto vinculan y controlan el actuar de la Administración, a fin de garantizar el principio del mérito como base fundante del sistema de la carrera judicial.



Reglas que así vistas son inmodificables, por cuanto se afectan principios básicos de nuestra organización, como derechos fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular, en orden a lo cual, cualquier incumplimiento de las etapas y procedimientos consignados en la convocatoria vulnera el derecho fundamental del debido proceso de los participantes, salvo, por supuesto, que por factores exógenos sea necesario efectuar algunas modificaciones a lo inicialmente previsto en la convocatoria, las que en todo caso deben ser plenamente publicitadas para que los participantes conozcan las nuevas reglas que rigen el concurso.

Bajo esa perspectiva, la posición jurídica del accionante supera el plano de una mera expectativa. Y, si bien la inscripción al concurso, la presentación de pruebas o incluso la superación de algunas etapas no generan por sí solas un derecho automático al nombramiento, la situación cambia cuando existe una lista de elegibles en firme, comunicada a la entidad nominadora, y el aspirante se encuentra ubicado dentro del número de vacantes ofertadas. En ese evento, la administración queda vinculada por el orden de mérito y por los efectos propios del acto administrativo que conformó la lista.

Ahora bien, como la respuesta del Ministerio del Trabajo consistió en que el nombramiento no opera de manera automática ni inmediata, pues deben surtirse etapas propias del procedimiento administrativo de provisión de empleos públicos, limitándose a señalar que se encontraba adelantando actuaciones internas bajo criterios de legalidad, orden, priorización institucional y capacidad operativa, se itera que dicha contestación resulta insuficiente para desvirtuar la vulneración alegada al derecho de petición y con él a los demás citados por el promotor de esta actuación, pues, se itera, la entidad no identificó cuál era la actuación concreta pendiente, cuál era su fundamento normativo, en qué estado se encontraba, ni por qué tenía la entidad la posibilidad jurídica de diferir indefinidamente el nombramiento de éste, constituyéndose así la respuesta brindada como general y abstracta que no resuelve de fondo la solicitud del actor, habida cuenta que desconoce lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015 cuando establece que, una vez en firme la lista de elegibles y enviada por la Comisión Nacional del Servicio Civil al jefe de la entidad para la cual se realizó el concurso, debe producirse el nombramiento en período de prueba dentro de los diez (10) días hábiles siguientes y en estricto orden de mérito, sin que el empleo pueda ser provisto bajo otra modalidad. Esta disposición no admite que la



entidad nominadora convierta trámites internos indeterminados en una barrera para la eficacia del concurso, pues ello vaciaría de contenido el principio constitucional del mérito.

Desde luego, la entidad nominadora conserva competencias administrativas para verificar requisitos, expedir el acto administrativo, comunicarlo y adelantar las actuaciones necesarias para la posesión; sin embargo, tales gestiones deben cumplirse dentro del marco normativo aplicable y no pueden ser utilizadas como fundamento genérico para desconocer o suspender los efectos de una lista en firme. En este asunto, el Ministerio no acreditó la existencia de solicitud de exclusión que afectara la posición del accionante, empate pendiente que alterara su ubicación, audiencia de escogencia indispensable para su caso, supresión del empleo, inexistencia de la vacante, falta de requisitos del aspirante o cualquier otra causal legal concreta que impidiera el nombramiento, y, que debiera poner en su conocimiento para tener por satisfecho el derecho de petición.

Por el contrario, la propia contestación del Ministerio reconoce que el accionante integra la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. 1160 del 9 de febrero de 2026, para el empleo ASESOR, Código 1020, Grado 9, OPEC No. 219179, y que el nombramiento será efectuado una vez culminen las etapas administrativas correspondientes. Incluso, la entidad alude a la realización posterior del nombramiento y a la comunicación del acto para permitir la posesión en el empleo al cual tendría derecho conforme al orden de mérito. Tal afirmación evidencia que la entidad no controvierte de fondo la posición meritoria del accionante, sino que pretende diferir su materialización sin una justificación objetiva, específica, verificable.

Tampoco resulta admisible trasladar al accionante las consecuencias de eventuales dificultades administrativas internas de la entidad. La finalidad del concurso de méritos es precisamente garantizar que el acceso al empleo público se produzca de manera objetiva, transparente y conforme al orden de mérito. Por ello, una vez consolidada la lista y comunicada su firmeza, la administración no puede oponer razones de conveniencia, oportunidad, priorización interna o capacidad operativa para desconocer un derecho que deriva del resultado del concurso.

Así mismo, si bien el accionante manifestó que la persona ubicada en la primera posición habría sido nombrada en período de prueba, el Despacho



advierde que la decisión no depende exclusivamente de ese aspecto; habida cuenta que, aun prescindiendo de dicha afirmación, lo cierto es que el actor ocupa la segunda posición dentro de una lista conformada para proveer dos vacantes definitivas. Por tanto, la vulneración se configura no por comparación aislada con otro elegible, sino por la falta de materialización del orden de mérito frente a quien se encuentra dentro del número de empleos ofertados sin que se le comunique a través de una respuesta completa y de fondo tal determinación.

Entonces, diáfano se muestra que la conducta del Ministerio del Trabajo además del derecho de petición, ciertamente compromete los derechos al debido proceso administrativo e igualdad en tanto desconoce los efectos de una actuación administrativa culminada con lista en firme. En el presente asunto, una vez comunicada la firmeza de la lista, correspondía al Ministerio adelantar las actuaciones necesarias para la provisión del empleo, sin introducir dilaciones carentes de soporte normativo. De tal suerte, si la entidad considera que existe una actuación pendiente que impide el nombramiento, tiene la carga de identificarla con precisión, señalar su fundamento jurídico y acreditar su incidencia concreta en la situación del actor, lo que hasta la fecha de esta providencia no ha ocurrido, pues no se halla probado que el accionante esté incurso en causal de exclusión, que no cumpla los requisitos del empleo o que exista una imposibilidad jurídica para efectuar el nombramiento. En consecuencia, la omisión del Ministerio vulnera el debido proceso administrativo, pues soslaya los efectos de una actuación reglada, culminada con una lista de elegibles en firme, y priva al accionante de la consecuencia jurídica derivada de su ubicación dentro del número de vacantes convocadas.

Y es que, en materia de concursos de méritos, la igualdad no solo se predica del acceso inicial al proceso de selección, sino también de la aplicación uniforme de las reglas del concurso y de la materialización del orden de mérito una vez conformada y en firme la lista de elegibles.

En este caso, el accionante integra una lista conformada para proveer dos vacantes definitivas y ocupa la segunda posición. Por tanto, su situación debía ser valorada conforme al parámetro objetivo que rige el concurso: el orden de mérito. El Ministerio no demostró que existiera una razón legal que justificara diferenciar su situación ni que la posición del actor estuviera afectada por una circunstancia que impidiera el nombramiento.





Debe precisarse que la afectación del derecho a la igualdad no depende exclusivamente de probar que otro aspirante ubicado en una posición posterior haya sido nombrado en su lugar. En este asunto, la vulneración surge de la falta de aplicación de las consecuencias propias de su ubicación objetiva dentro del número de vacantes ofertadas. De esa manera, al no materializar el nombramiento sin acreditar una causa legal suficiente, la entidad desconoció la igualdad de oportunidades que informa el acceso al empleo público por mérito.

Últimamente, en cuanto al derecho al trabajo, dado que, en el caso concreto, el accionante no reclama una expectativa abstracta ni pretende que se utilice la lista para proveer vacantes distintas, futuras o no convocadas, sino que su pretensión se funda en que ocupó la segunda posición dentro de una lista conformada para proveer dos vacantes definitivas del empleo ASESOR, Código 1020, Grado 9, OPEC No. 219179, es claro que la discusión no se ubica en el plano de una eventual expectativa de vinculación, sino en la materialización de un resultado concreto del concurso de méritos.

Por tanto, la omisión del Ministerio incide directamente en el derecho al trabajo del accionante, en tanto le impide acceder al empleo público para el cual concursó y respecto del cual obtuvo una posición suficiente dentro del número de vacantes ofertadas. Si bien el derecho al trabajo no implica la obligación estatal de proveer cualquier empleo solicitado por una persona, sí exige que, cuando el propio Estado convoca un concurso, fija reglas objetivas, conforma una lista en firme y reconoce un orden de mérito, actúe de manera coherente con ese resultado.

En consecuencia, el derecho al trabajo resulta vulnerado en conexidad con el de petición, debido proceso y acceso a cargos públicos, pues la entidad accionada impide con su omisión de pronunciarse de fondo a la petición elevada que el accionante materialice el resultado obtenido dentro del concurso, pese a encontrarse dentro del número de vacantes definitivas ofertadas y no haberse acreditado impedimento jurídico para su vinculación en período de prueba.

Finalmente, debe precisarse que la orden constitucional no implica sustituir a la administración en sus competencias propias ni alterar las reglas del concurso, por el contrario, se limita a hacer efectivos los efectos jurídicos de una lista de elegibles ya conformada, publicada, en firme y comunicada a la entidad nominadora. En ese sentido, la intervención del juez



constitucional resulta procedente, en tanto la omisión advertida afecta directamente derechos fundamentales y no se trata de modificar el concurso, reabrir etapas, valorar pruebas o desplazar competencias técnicas de la CNSC.

En mérito de lo expuesto, se ampararán los derechos fundamentales de petición, debido proceso administrativo, igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos por mérito del señor YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO; y, en consecuencia, se ordenará al MINISTERIO DEL TRABAJO que, dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia resuelva de manera clara y precisa, emitiendo y notificando al accionante una decisión de fondo respecto de su solicitud presentada el catorce (14) de marzo de dos mil veintiséis (2026) encaminada a obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento en período de prueba para el empleo denominado ASESOR, Código 1020, Grado 9, identificado con el Código OPEC No. 219179, perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Ministerio del Trabajo, en el marco del Proceso de Selección No. 2618 de 2024.

Y, en relación con la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, advierte el Despacho que no se evidencia actuación u omisión vulneradora de los derechos fundamentales invocados, pues, de acuerdo con lo acreditado en el expediente, dicha entidad adelantó las actuaciones propias de su competencia dentro del proceso de selección, relacionadas con la conformación, publicación y comunicación de la firmeza de la lista de elegibles. En ese sentido, la omisión que da lugar al amparo se atribuye al **MINISTERIO DEL TRABAJO**, en su condición de entidad nominadora, por ser la autoridad llamada a expedir y comunicar el acto administrativo de nombramiento en período de prueba. En consecuencia, se dispondrá la desvinculación de la CNSC del presente trámite constitucional.

En mérito de lo expuesto y por autoridad de la ley el Juzgado 21 Laboral Del Circuito De Bogotá,

### RESUELVE

**PRIMERO: AMPARAR** los derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo, igualdad, trabajo y el derecho al mérito del señor YAIR LEONARDO FONSECA ALFONSO, vulnerados por el MINISTERIO DEL TRABAJO, conforme a lo manifestado en la parte motiva de la presente decisión.

PSMS 202610052



**SEGUNDO: ORDENAR** al MINISTERIO DEL TRABAJO, a través de su representante legal que, dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia resuelva de manera clara y precisa, emitiendo y notificando al accionante una decisión de fondo respecto de su solicitud presentada el catorce (14) de marzo de dos mil veintiséis (2026) encaminada a obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento en período de prueba para el empleo denominado ASESOR, Código 1020, Grado 9, identificado con el Código OPEC No. 219179, perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Ministerio del Trabajo, en el marco del Proceso de Selección No. 2618 de 2024, conforme a lo expuesto en la motiva de esta providencia.

**TERCERO: DESVINCULAR** de la presente acción constitucional a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, conforme a lo manifestado en la parte motiva de la presente decisión.

**CUARTO: NOTIFICAR**, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, la decisión adoptada a las partes por el medio más expedito.

**QUINTO: REMITIR** el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual su revisión, si no fuere impugnado oportunamente el presente fallo.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
**CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ GAMBA**  
**JUEZ**



Tunja, dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

*Proceso:* **ACCIÓN DE TUTELA**

*Radicado:* **150013110001-2026-00151-00**

*Accionante:* **Juan Guillermo Salgado Lambraño**

*Accionada:* **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC  
MINISTERIO DEL TRABAJO**

### **Asunto**

Procede el Despacho a emitir el Fallo de Primera Instancia dentro de la acción de tutela referenciada, de conformidad con el art. 86 de la Constitución Política, Decreto 2591 de 1991 y 333 de 2021, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes antecedentes:

#### **1 Sujetos Procesales:**

El señor **JUAN GUILLERMO SALGADO LAMBRÑO**, quien actúa en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra de la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC)** y el **MINISTERIO DEL TRABAJO** con el fin de obtener el amparo a los derechos fundamentales a la Igualdad, Trabajo, Debido Proceso, Acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, Derecho al Mérito.

#### **2. Del trámite de la acción como Tutela masiva**

Acción de tutela incoada ante el **Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería**, quien mediante auto de fecha 19 de marzo de 2026, dispuso su admisión, al tiempo que ordenó la vinculación de todos los integrantes de la lista de elegibles del proceso de selección No. 2618 de 2024, Código 2003, Grado 14, OPEC No. 221268, que pudieran verse afectados con una eventual decisión en el trámite de tutela, quienes deberán ser notificados por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC mediante los medios electrónicos disponibles y negó la medida provisional solicitada.

Mediante auto de fecha seis de marzo de 2026 (sic), que conforme a la calenda se precisa fue proferido el seis de abril de 2026, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería, dispuso la remisión de la presente acción constitución para ante este Despacho, **atendiendo las reglas de reparto en materia de tutela masiva y al precedente jurisprudencial aplicable**, al advertir que este Juzgado conoció de similar acción constitucional.

En atención el Despacho advirtió que en efecto aquí se adelantó la acción de tutela No. 150013110001-2026-00120-00 por la señora **Diana Marcela Larotta Morales**, contra la **Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC** y el **Ministerio del Trabajo**, entidad representada legalmente por su director y señor Ministro, respectivamente, o quien haga sus veces, a fin de que se proteja sus derechos fundamentales a al debido proceso, igualdad, acceso igualitario a cargos públicos, y el principio constitucional de legalidad administrativa, transparencia en el concurso de méritos.

Acción constitucional en cuya atención **se profirió sentencia de primera instancia del seis (6) de diciembre de dos mil veintiséis.**

En lo que respecta a la comparación de los supuestos de la triple identidad se tiene y consideró:

Supuestos de Identidad	Tutela 150013110001-2026-00120-00 <b>Juzgado Primero de Familia de Tunja.</b>	Tutela 230013333010-2026-00110-00. <b>Juzgado Décimo Administrativo de Montería.</b>
Sujeto Pasivo	Comisión Nacional del Servicio Civil - Ministerio del Trabajo.	Comisión Nacional del Servicio Civil - Ministerio del Trabajo.
Objeto	Pretende el Amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso igualitario a cargos públicos, y el principio constitucional de legalidad administrativa, transparencia en el concurso de méritos.	Pretende el Amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso administrativo, al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y al mérito como principio rector del sistema de carrera administrativa.
Causa	La presunta vulneración se origina en la omisión de adelantar el nombramiento en período de prueba en el cargo Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Código 2003, Grado 14, OPEC No. 221268 de la accionante DIANA MARCELA LAROTTA MORALES , pese a la firmeza de la posición del accionante y encontrándose dentro de las vacantes, como consecuencia de la suspensión del uso de la lista, derivada del trámite de solicitudes de exclusión de los aspirantes en las posiciones 10 y 133, sin término definido de resolución.	La presunta vulneración se origina en la omisión de adelantar el nombramiento en período de prueba en el cargo Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Código 2003, Grado 14, OPEC No. 221268 del accionante JUAN GUILLERMO SALGADO LAMBRAÑO, pese a la firmeza de la posición del accionante y encontrándose dentro de las vacantes, como consecuencia de la suspensión del uso de la lista, derivada del trámite de solicitudes de exclusión de los aspirantes en las posiciones 10 y 133, sin término definido de resolución.

Acorde a lo anterior y bajo los presupuestos correspondientes al reparto de tutelas masiva, establecidos por el Decreto 1834 de 2015, que adicionó el Decreto 1069 de 2015 y reglamentó el Art. 7 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado por auto de ocho (8) de abril de dos mil veintiséis (2026), avocó el conocimiento de la acción de tutela incoada por el señor **Juan Guillermo Salgado Lambraño**, contra las mismas accionadas Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y Ministerio del Trabajo, disponiendo mantener incólume la actuación surtida en curso de la presente acción y tener por presente las manifestaciones expresadas por las accionadas y vinculadas; tener como prueba, con el valor legal que le corresponde, los documentos relacionadas y allegados por las partes e intervinientes.

**3. De las Respuestas y pronunciamientos frente a la acción constitucional**

**El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería**, mediante auto de fecha 19 de marzo de 2026, (Archivo 0003, fl. 186), dispuso su admisión de la acción al tiempo que ordenó la NOTIFICACIÓN a las **accionadas y las vinculadas**, para que en el

término de **dos (2) días** siguientes a la notificación de esta providencia, se pronuncien sobre los hechos que plantea la parte actora, a fin de verificar los fundamentos base de la solicitud.

**3.1. La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC**, por conducto del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dr. Jhonatan Daniel Alejandro Sánchez Murcia, allega pronunciamiento (Archivo 0003, fl. 202).

“Tras citar el marco normativo precisa que en efecto la CNSC es el organismo encargado de la administración y vigilancia del sistema General de Carrera y de los sistemas especiales y específicos de carrera administrativa, en virtud del cual le otorga la función de establecer los reglamentos y lineamientos generales con que se desarrollan los procesos de selección para la provisión de empleos de carrera; como consecuencia la CNSC, *“en uso de sus competencias Constitucionales y Legales, procedió a adelantar el Concurso Abierto y Ascenso de Méritos para proveer las vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Ministerio del Trabajo; proceso que se identificó como “Proceso de Selección No. 2618 de 2024” Para tal efecto, se expidió el Acuerdo No. 20 del 16 de mayo de 2024 y su anexo”*; precisando que *“la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas para su realización y a los participantes”*.

Acorde a la convocatoria, precisa de manera sucinta el desarrollo del proceso de selección No. 12618 de 2024, en sus diferentes etapas; proceso el cual **actualmente se encuentra ya con conformación y adopción de las listas de elegibles** para los empleos ofertados en el mismo, a cuyo tenor confirma que la accionante se *“inscribió al empleo denominado INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, código 2003, grado 14, identificado con código OPEC No. 221268, en el cual obtuvo superó satisfactoriamente todas las fases y pruebas, por lo que hace parte de la Resolución No. 1353 del 19 de febrero de 2026, “Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer Quinientas setenta y siete (577) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Código 2003, Grado 14, identificado con el Código OPEC No. 221268 perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Ministerio del Trabajo, en el marco del Proceso de Selección No. 2618 de 2024”, en la cual ocupa la posición 17.”* Acto administrativo que precisa se encuentra ejecutoriado.

**Frente a las pretensiones de la accionante y en concreto al trámite para la realización de las audiencias públicas** para escogencia de vacantes de empleos, señala que el mismo esta reglado por el Acuerdo No. 16 del 4 de junio de 2025, (Art. 3); precisando que el mismo es competencia del Jefe de Talento Humano de la Entidad, no obstante precisa que “el Ministerio del Trabajo le solicitó a la CNSC el apoyo para la realización de las audiencias a través del aplicativo SIMO”, por lo que la entidad en el marco del proceso de selección No. 2618 de 2024, “se encuentra realizando las audiencias de escogencia conforme a las vacantes registradas por el Ministerio del Trabajo”, **esto es por delegación**.

*“Aclarado lo anterior, en cuanto al término para la realización de audiencias, es preciso indicar frente al empleo identificado con código OPEC No. 221268 fueron presentadas 32 solicitudes de exclusión, las cuales afectaron 21 posiciones meritorias, precisándose que la primera solicitud de exclusión se encuentra en la posición No. 10, motivo por el cual la audiencia de escogencia de vacantes se realizará de manera parcial, en los términos del parágrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo 016 de 2025:*

**“Parágrafo 2.** Cuando una lista adquiera firmezas individuales, se deberán efectuar las Audiencias Públicas necesarias para garantizar el derecho de escogencia de la ubicación de su preferencia a todos los elegibles que la conforman, de la siguiente forma:

1. Cuando una lista de elegibles adquiera firmezas individuales y estas correspondan al primer o primeros lugares con firmezas de las posiciones en forma consecutiva, se deberá efectuar inicialmente la Audiencia Pública con dichos elegibles. En caso que el número de vacantes a proveer de un mismo empleo sea de ocho (8), y la lista esté conformada por veinte (20) elegibles y adquirieran firmeza individual las posiciones uno, dos, tres y cuatro, se deberá efectuar Audiencia Pública para la selección de ubicaciones con los

primeros cuatro elegibles. Las demás ubicaciones se llevarán a audiencia a medida que las siguientes posiciones adquieran firmeza.

2. Para las firmezas individuales de posiciones intermedias en la lista, la audiencia no podrá llevarse a cabo hasta tanto las primeras posiciones cobren firmeza. Cuando el número de vacantes a proveer de un mismo empleo es de ocho (8), y la lista está conformada por veinte (20) elegibles y adquieren firmeza las posiciones cinco (5) y seis (6), no se deberá efectuar audiencia pública para la selección de vacantes hasta tanto las posiciones uno, dos, tres y cuatro cobren firmeza.”

Así las cosas, se aclara que la audiencia para escogencia de vacantes del empleo identificado con código OPEC No. 221268 se realizará de la siguiente manera:

1. Se realizará de acuerdo con los resultados de desempate de las posiciones meritorias, trámite que deberá realizarse directamente por el Ministerio del Trabajo y una vez culminado remitirlos a la CNSC (actuación que se encuentra el Ministerio realizando el trámite y a la fecha no ha remitido los resultados a esta Comisión Nacional).

2. Una vez la CNSC cuente con los resultados de desempates, procederá a parametrizar la audiencia de escogencia de vacantes teniendo en cuenta lo siguiente:

2.1 Se está realizando una primera audiencia de las posiciones 1 a 9 de la lista de elegibles, frente a quienes no se presentó solicitud de exclusión por cuanto no tienen elegibles en condición de empate, la cual se está desarrollando desde el 16 de marzo hasta el 18 de marzo de 2026

(...)

2.3 Y por su parte frente a la posición No. 10 y en adelante, sobre las cuales recayó solicitudes de exclusión se adelantará el trámite de que trata el artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005:

“ARTÍCULO 15. La Comisión Nacional del Servicio Civil, de oficio o a petición de parte excluirá de la lista de elegibles al participante en un concurso o proceso de selección, cuando compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en la sumatoria de los puntajes obtenidos en las distintas pruebas; también podrá ser modificada por la misma autoridad, adicionándola con una o más personas, o reubicándola cuando compruebe que hubo error, caso en el cual deberá ubicarse en el puesto que le corresponda.”

2.4 Sólo hasta tanto se levanta la medida provisión enunciada en el numeral 2.1. del presente informe y, esté definida la situación de los elegibles de quienes se presentó solicitud de exclusión por parte de la Comisión de Personal del Ministerio del Trabajo y sus posiciones queden en firme o se excluya (según sea el caso), podrá realizarse la audiencia de escogencia de vacantes en estricto orden de mérito de los elegibles sobre los cuales opere su firmeza individual, ...

(...)

Se precisa que la realización parcial de audiencias no corresponde a un actuar caprichoso ni arbitrario por parte de esta Comisión Nacional, pues obedece a que la Comisión de Personal del Ministerio del Trabajo **presentó solicitudes de exclusión de la lista de elegibles** del empleo al cual se inscribió la accionante las cuales impactaron posiciones meritorias, precisándose que no es posible realizar audiencias sin tener en cuenta a estos elegibles, por cuanto su situación en la lista de elegibles está siendo cuestionada por parte de la entidad nominadora, de manera que hasta tanto se resuelva si es procedente su exclusión de la lista o su continuidad en la misma podrá realizarse la audiencia de escogencia de vacantes en garantía del escrito orden de mérito.

Así las cosas, se aclara que la decisión de las solicitudes de exclusión no corresponde “a una paralización indefinida del uso material de la lista de elegibles” como alude el tutelante, pues surgió a raíz de que la Comisión de Personal de la Entidad nominadora está cuestionando el derecho de elegibles a hacer parte de la lista, por lo que de realizar la audiencia de escogencia de vacantes sin tener en cuenta a dichos elegibles se le estaría vulnerando su derecho al acceso a la carrera administrativa e igualdad, pues, por ejemplo, para el caso del empleo identificado con código OPEC 221268 **la primera solicitud de exclusión recae sobre la posición No. 10**, la cual corresponde a una posición meritoria, lo que implica que en un primer lugar corresponde **a un ciudadano llamado a ser nombrado en periodo de prueba en una de las quinientas setenta y siete vacantes ofertadas en este proceso de selección.**

(...)

La firmeza de la posición No. 10 se encuentra pendiente, por lo que para este caso es **imposible** realizar a la fecha el trámite de audiencia de escogencia de vacante, teniendo presente que el referido empleo cuenta con 37 ubicaciones geográficas diferentes.

En este sentido, no podría saltarse este lugar de elegibilidad y realizar la audiencia sin la posición No. 10, por cuanto esta cuenta con un mejor derecho que la posición No. 11, 12, 13, 14,...33....194.... y siguientes

para la escogencia de su vacante, pues se recuerda que la escogencia de la ubicación geográfica de la vacante ganada a través del concurso se selecciona en estricto orden de mérito, contrario a la manifestación del accionante, que a su parecer “la CNSC decidió fraccionar la audiencia, supeditar el avance de la lista a exclusiones de terceros”, sin tomar en cuenta la imposibilidad de determinar las vacantes que quedarían si las personas sobre las cuales recayeron las **solicitudes** de exclusión continúan o no en la las Listas, situación que se desatará solo hasta tanto se desaten las correspondientes actuaciones administrativas, tal como se informó a otro aspirante mediante el oficio 2026RS044758 del 9 de marzo de 2026 que cita en su escrito.”

Solicita se niegue la acción constitucional ante la no existencia de vulneración alguna de derechos fundamentales alegados, al tiempo que solicita su desvinculación en consideración a la falta de legitimación por pasiva.

**3.2** La notificación de los vinculados se surtió por conducto de la página web [www.cnsc.gov.co](http://www.cnsc.gov.co), enlace SIMO, dispuesto como “medio de divulgación e información oficial para el proceso de selección”, según lo precisa la **constancia expedida por la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la CNSV, de fecha 24 de marzo de 2026** (Archivo 0003, fl. 310). Sin que se hubieren allegado pronunciamiento alguno por parte de alguno de éstos.

## **4. Consideraciones**

### **4.1. Competencia:**

Considerando lo preceptuado por los Decretos 2591 de 1991, art. 37 y 333 de 2021, art. 1o núm. 2o, este Despacho es competente para conocer y resolver esta acción de tutela, atendiendo el factor territorial y la calidad de las accionadas.

El artículo 86 de la Constitución consagra el derecho de quien actúe en su nombre a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúa en su nombre, la protección de sus derechos fundamentales cuando se amenacen o vulneren, mediante procedimiento preferente y sumario, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991. Procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o particulares, que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de los derechos fundamentales y, que no existan otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, de acuerdo con las circunstancias en que se encuentre el solicitante.

Conforme a lo anterior corresponde al Juez el deber de apreciar en concreto, en cuanto a su eficacia, la posible existencia de otros medios de defensa, atendiendo a las circunstancias en que se encuentra el solicitante, es decir, que la acción de tutela procede en la medida en que por ley no se den los instrumentos adecuados para manifestar la inconformidad en defensa de sus derechos, ya mediante las acciones judiciales pertinentes, ya mediante la interposición de recursos o la formulación de nulidades, etc.; de lo contrario, la tutela se convertiría en un mecanismo adicional a los enunciados y, ese no fue el querer del constituyente; salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

### **4.2. De la acción de tutela masiva y su aplicación en el caso:**

La Corte Constitucional ha señalado que el Decreto 1834 de 2015 establece las reglas de reparto para las acciones de tutela que se enmarcan dentro del fenómeno de la **tutela masiva**<sup>1</sup>, definiendo como tales a aquellas acciones en las que existe uniformidad entre los casos y que se presentan *i)* de forma masiva -en un solo momento- o *ii)* con posterioridad a otra solicitud de amparo; reiterando que estas reglas de reparto tienen como finalidad evitar que, frente a casos idénticos, se produzcan efectos o consecuencias diferentes. Así, ante una presentación masiva de acciones de tutela “*que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o*

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Autos 1481 y 2002 de 2023.

*vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad*<sup>2</sup>, en principio, las oficinas de reparto son las encargadas de realizar la remisión y acumulación de los expedientes a la primera autoridad que avocó conocimiento.

No obstante, la misma jurisprudencia constitucional ha señalado, de manera pacífica y uniforme, que el juez que pretende apartarse del conocimiento de una acción con fundamento en la regla de reparto para la tutela masiva debe **(i) cumplir con una carga argumentativa y (ii) acreditar la existencia de la triple identidad**.

El cumplimiento de la carga argumentativa, se erige como un requisito que se debe analizar para proveer si se configura el fenómeno de la tutela masiva, por lo que el juez constitucional de conocimiento debe “*señalar con “rigor demostrativo y coherencia” el cumplimiento de los presupuestos que integran la triple identidad*”<sup>3</sup>, pues de no contarse con los elementos suficientes para cumplir con la carga argumentativa que acredite la existencia de la triple identidad, deberá darse aplicación de la regla de competencia del factor territorial “a prevención” y continuar con el trámite de tutela, dando prevalencia a los principios de celeridad y eficacia que rigen el trámite de tutela. Así lo ha precisado la corte constitucional en su jurisprudencia. (Autos 172 de 2016, 071 de 2021, 2002 de 2023 y 1202 de 2025),

*Ahora bien, frente a la Triple identidad.* la Corte Constitucional ha precisado que la autoridad judicial que considere aplicable la regla de reparto se podrá apartar del conocimiento de la tutela y remitirla al primer juez que conoció el asunto, cuando, de manera previa, constate la existencia de identidad de (i) objeto, (ii) causa y (iii) sujeto pasivo, entre el asunto primigenio y el recurso de amparo que llegó a su conocimiento. Estos criterios se han definido así:

- i) La identidad de objeto implica que las acciones de tutela que pretenden ser acumuladas “*presenten uniformidad en sus pretensiones, entendidas estas últimas, como aquello que se reclama ante el juez para efectos de que cese o se restablezca la presunta vulneración o amenaza de los derechos invocados*”.
- ii) La identidad de causa ocurre cuando las acciones que pretenden ser acumuladas “*se fundamenten en los mismos hechos o presupuestos fácticos -entendidos desde una perspectiva amplia-, es decir, la razones que se invocan para sustentar la solicitud de protección*”. Adicionalmente, la Corte ha indicado que “la causa en materia de acción de tutela se vincula con las actuaciones o circunstancias que motivan o impulsan su presentación y cuya ocurrencia debe estar comprendida por el supuesto de hecho -en sentido amplio- de una norma de derecho fundamental”.
- iii) Finalmente, debe existir identidad de sujeto pasivo, lo cual se presenta cuando “*el escrito de tutela se dirija a controvertir la actuación del mismo accionado o demandado*”<sup>4</sup>.

En el presente caso, se llegó a la conclusión de que las acciones de tutela referenciadas presentan identidad de **sujeto pasivo**, en tanto han sido interpuestas contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Ministerio del Trabajo; igualmente, existe identidad de **objeto**, al perseguir la protección de los mismos derechos fundamentales y el decreto de pretensiones encaminadas a la reactivación de la lista de elegibles y el nombramiento en período de prueba de los accionantes dentro del empleo ofertado en el proceso de selección No. 2618 de 2024; y, finalmente, comparten identidad de **causa**, al originarse en la misma situación fáctica consistente en la suspensión del uso de la lista de elegibles con ocasión del trámite de solicitudes de exclusión, sin término definido de resolución.

---

<sup>2</sup> Decreto 1834 de 2015

<sup>3</sup> Auto 189 de 2020. Cfr. también, los autos 211, 212 y 224 de 2020. En estos autos, La Sala Plena de la Corte

Constitucional mediante Autos 211, 212 y 224 de 2020 fijó pautas dirigidas a determinar el alcance de los elementos que componen la triple identidad del reparto de acciones de tutela masiva.

<sup>4</sup> Corte Constitucional, Autos 211, 212 y 224 de 2020.

Acorde a lo anterior se consideró dable avocar el conocimiento de la presente acción constitucional, **en aplicación al fenómeno jurídico de tutela masiva**, sin que en el presente caso sea dable la acumulación a la acción constitucional aquí adelantada, pues como se advirtió en la misma ya se profirió decisión de fondo.

#### **4.3. Problema jurídico:**

Corresponde a este Despacho, determinar si las accionadas vulneraron el derecho al debido proceso, derecho al trabajo, acceso igualitario a cargos públicos, igualdad, dignidad humana (autodeterminación), confianza legítima y el principio constitucional del mérito, a partir de las Resoluciones Administrativas proferidas con fundamento en el Acuerdo No. 20 de fecha 16 de mayo de 2024, *“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de Ingreso y Ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal del Ministerio del Trabajo, Proceso de Selección No. 2618 de 2024”*

A efectos de resolver el problema jurídico planteado, el Despacho con apoyo en la jurisprudencia constitucional se referirá a la procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos.

#### **4.4. Presupuestos procesales:**

##### **4.4.1 Legitimación por activa:**

Frente a este tipo de acciones constitucionales, hay que considerar que prima el aspecto de la informalidad, lo sustancial sobre lo formal. Sin embargo, observa el Despacho que el libelo demandatorio reúne los requisitos previstos en el art. 14 del Decreto 2591 de 1991 y la accionante **está legitimada por activa** para interponer la acción de tutela a nombre propio porque es el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

##### **4.4.2. Legitimación por Pasiva:**

El requisito de legitimación en la causa por pasiva exige que la acción de tutela sea interpuesta en contra del sujeto presuntamente responsable de la vulneración o amenaza de la prerrogativa constitucional o el que esté llamado a solventar las pretensiones, sea este una autoridad pública o un particular<sup>5</sup>.

En lo que respecta a las accionadas y vinculadas, tenemos:

En el presente asunto, el Despacho encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la **Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC**, ante la cual se encausan las reclamaciones del accionante y de las personas coadyuvantes de la acción, **dada la etapa actual en que se encuentra el desarrollo del concurso**, en la que convergen tanto la audiencia pública para garantizar el derecho de escogencia de plazas, como la decisión de las treinta y dos (32) solicitudes de exclusión, presentadas por la entidad Nominadora (Ministerio del Trabajo), las cuales se encuentran por resolver con incidencia en el desarrollo de la audiencia pública en alusión.

Es, en suma, la entidad administrativa de la cual depende la resolución de las pretensiones de la accionante y las demás personas que conforman el registro de elegibles. Así, de hallarse demostrada la violación a las garantías, aquella deberá ser quien realice las actuaciones necesarias para la reivindicación de aquellas.

Acorde al acervo probatorio allegado, se tiene que **el Ministerio de Trabajo carece de legitimación en la causa por pasiva** respecto de la reclamación de la accionante, pues su competencia se limita a la administración de la planta de personal en su condición de entidad nominadora, la que se encuentra supeditada a la labor de la CNSC.

---

<sup>5</sup> Sentencia T-593 de 2017.

#### 4.4.3. Inmediatez:

El artículo 86 de la Constitución Política prevé que la acción de tutela podrá interponerse en todo momento y lugar. Por esta razón, no es posible establecer un término de caducidad cierto para presentar esta acción<sup>6</sup>. No obstante, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de inmediatez exige que la solicitud de amparo se presente en un término razonable respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales<sup>7</sup>. Esto, porque, de otra forma, se desvirtuaría el propósito mismo de la acción de tutela, esto es, permitir una protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales<sup>8</sup>.

En este caso, la tutela presentada por el accionante satisface el requisito de inmediatez porque la acción de tutela fue presentada de forma oportuna. En efecto, al analizar el expediente se advierte que la petición que se concita data de **16 de marzo de 2026**, como fecha en la cual se realiza por parte de la CNSC la citación a las audiencias de escogencia de plazas, a la que se convocara únicamente a las primera nueve (9) personas de la lista de elegibles.

#### 4.4.4 Subsidiariedad:

Según el artículo 86 constitucional, la acción de tutela es un medio judicial de carácter residual y subsidiario. La persona cuyos derechos han sido amenazados o vulnerados puede acudir a la tutela siempre que: *“(i) la parte interesada no disponga de otro medio judicial de defensa; (ii) existan otros medios de defensa judicial, pero son ineficaces o inidóneos para proteger derechos fundamentales en el caso concreto; o (iii) resulte necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso el cual la tutela procederá como mecanismo transitorio de protección. Esto implica que el accionante debe haber agotado previamente todos los caminos de defensa judicial legalmente disponibles para la resolución de su caso”*<sup>9</sup>.

En principio, **la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para debatir y/o resolver las controversias que surgen en desarrollo de las actuaciones de la administración**, pues la competencia para ello radica en cabeza de la **jurisdicción contencioso administrativa**, por ser ésta el juez natural de este tipo de procedimientos y contar con una estructura a partir de la cual se pueda desarrollar un amplio debate legal y probatorio a efectos de comprobar si los llamados a cumplir las funciones del Estado contrariaron el mandato de legalidad.

Sin embargo la Corte Constitucional ha sostenido que, **de manera excepcional**, es posible hacer uso de este remedio constitucional para resolver el citado debate, siempre y cuando se acredite la existencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual cabe el amparo como mecanismo transitorio, o se establezca que el medio de control contemplado en la legislación resulta ineficaz para la protección del derecho a la luz de las circunstancias de cada caso particular, evento en el que opera como medio de defensa definitivo<sup>10</sup>.

En cuanto al derecho al debido proceso, la alta corporación de lo constitucional, ha precisado que el mismo constituye una garantía que debe respetarse no solo en los procesos judiciales, sino también en los de índole administrativa que impliquen consecuencias para los administrados, en tal ámbito debe propenderse por un proceso justo, válido y adecuado al procedimiento que particularmente lo regula, así mismo, que cuando se predica el desconocimiento de tal postulado corresponde verificar la trasgresión haciendo *“(...) uso de las causales de procedencia de tutela contra decisiones*

---

<sup>6</sup> Sentencia C-543 de 1992.

<sup>7</sup> Sentencia SU-961 de 1999.

<sup>8</sup> Sentencia T-307 de 2017.

<sup>9</sup> Sentencia T-089 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos.

<sup>10</sup> Sentencias T-830 de 2004, T-957 de 2011



judiciales, puesto que si bien se trata de escenarios diferentes, tales supuestos describen las formas más usuales de afectación del derecho...”<sup>11</sup> y, de mayor importancia para este asunto en particular, el hecho de ser la solicitud de amparo subsidiaria y residual, lo que “(...) implica que si la persona cuenta con un medio de defensa efectivo a su alcance o, habiendo contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela devendrá improcedente” (T-830 de 2004).

#### 4.5 Del caso en concreto:

Descendiendo al caso en estudio y en concordancia con las razones expuestas y que la accionante solicita la salvaguarda de sus derechos frente a las actuaciones desplegadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, —con ocasión de la convocatoria efectuada por la misma (CNSC)<sup>12</sup>, en la modalidad de ingreso, para proveer el empleo denominado INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Código 2003, Grado 14, identificado con el Código OPEC No. 221268 perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Ministerio del Trabajo, en el marco del Proceso de Selección No. 2618 de 2024—, luego la presente acción de tutela resulta ser un camino idóneo para buscar la protección de sus derechos fundamentales presuntamente amenazados siempre y cuando demuestre el daño inminente al que se están haciendo acreedora.

Conforme a los argumentos expresados por la accionante, los coadyuvantes, las accionadas y los intervinientes, **como aspecto medular** se tiene que frente al empleo identificado con código OPEC No. 221268, fueron presentadas 32 solicitudes de exclusión que afectan 21 posiciones meritorias de la lista de elegibles, siendo la primera la posición No. 10, las que se encuentran pendiente de resolver administrativamente, motivo por el cual la CNSC convocó a audiencia de escogencia de vacantes “de manera parcial” a las primeras 9 personas que conforman el registro de elegibles, en aplicación a lo dispuesto por el parágrafo del Art. 5 del Acuerdo 16 de 2025, a cuyo literalidad precisa:

“Parágrafo 2. Cuando una lista adquiera firmezas individuales, se deberán efectuar las Audiencias Públicas necesarias para garantizar el derecho de escogencia de la ubicación de su preferencia a todos los elegibles que la conforman, de la siguiente forma:

1. Cuando una lista de elegibles adquiera firmezas individuales y estas correspondan al primer o primeros lugares con firmezas de las posiciones en forma consecutiva, se deberá efectuar inicialmente la Audiencia Pública con dichos elegibles. En caso de que el número de vacantes a proveer de un mismo empleo sea de ocho (8), y la lista esté conformada por veinte (20) elegibles y adquirieran firmeza individual las posiciones uno, dos, tres y cuatro, se deberá efectuar Audiencia Pública para la selección de ubicaciones con los primeros cuatro elegibles. Las demás ubicaciones se llevarán a audiencia a medida que las siguientes posiciones adquieran firmeza.

2. Para las firmezas individuales de posiciones intermedias en la lista, la audiencia no podrá llevarse a cabo hasta tanto las primeras posiciones cobren firmeza. Cuando el número de vacantes a proveer de un mismo empleo es de ocho (8), y la lista está conformada por veinte (20) elegibles y adquieren firmeza las posiciones cinco (5) y seis (6), no se deberá efectuar audiencia pública para la selección de vacantes hasta tanto las posiciones uno, dos, tres y cuatro cobren firmeza.” (subraya el Despacho)

Acorde a lo anterior la CNSC, se encuentra realizando una primera audiencia con las personas que conforman las posiciones **1 a 9** de la lista de elegibles, frente a quienes no se presentó solicitud de exclusión ya que no tienen elegibles en condición de empate, audiencia que se desarrolla desde el 16 de marzo de 2026 y que en virtud de la presente acción constitucional fuere suspendida, como medida provisional deprecada.

De entrada, se concluye **la improcedencia** de esta herramienta constitucional al incumplirse el presupuesto de subsidiariedad, cual se precisara en sentencia de tutela de fecha 6 de abril de 2026, proferida dentro de la acción de tutela con radicado No. 150013110001-2026-00120-00, que se erige como el fallo matriz, bajo el fenómeno de la

<sup>11</sup> Sentencia T-076 de 2011

<sup>12</sup> Acuerdo No. 20 de fecha 16 de mayo de 2024, “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de Ingreso y Ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal del Ministerio del Trabajo, Proceso de Selección No. 2618 de 2024.

tutela masiva, cuyas consideraciones se reiteran, pues no se observa variación alguna en los elementos considerados, **sujeto, objeto y causa**.

La controversia se encausa en la forma en como la administración aplicó las reglas del sistema específico de citación a audiencia de escogencia de plazas, para el caso una primera audiencia con quienes integran las primeras nueve posiciones, cual lo determina el acto administrativo.

En suma la inconformidad de la accionante recae sobre la legalidad del acto administrativo particular mediante el cual se dispone la convocatoria a las Audiencias Públicas “**necesarias**” para garantizar el derecho de escogencia de la ubicación de preferencia a todos los elegibles que la conforman, ante lo cual considera el Despacho que ésta cuenta con otros medios de defensa judicial, entre otros la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no siendo la acción de tutela el escenario para controvertir la disposición administrativa que regla dicho procedimiento, puntualmente determinado en el **Parágrafo 2 del Art. 5 del Acuerdo 016 de 2025**, que dicho sea de paso ejemplifica el procedimiento a seguir, estando vendado a este Despacho, en sede constitucional, desplazar la competencia especializada del juez natural.

Al respecto, la Corte Constitucional<sup>13</sup>, ha sostenido que la acción de tutela constituye un mecanismo subsidiario y excepcional, procedente únicamente cuando se verifique una vulneración efectiva de derechos fundamentales y no existan otros medios de defensa judicial idóneos, lo que no acontece en el presente caso, cual se ilustrara líneas arriba, sumado a que la accionante no acreditó las circunstancias excepcionales de salud, unidad familiar o condiciones de especial protección, que demuestren inminencia, gravedad o irreparabilidad de un daño que justifiquen el amparo constitucional, solo se encausa la acción ante la inconformidad frente a la citación de las primeras nueve personas que conforman la lista de elegibles, dentro las cuales no se encuentra la accionante (quien ocupa el puesto 17), máxime cuando están de por medio los derechos de las personas que por **mérito** fueron llamadas o convocadas por parte de la entidad, bajo las reglas que prevé y precisa el marco normativo que regula la provisión del empleo.

Corolario, **no se demostró que se esté causando un perjuicio irremediable**; el accionante cuenta con otro medio idóneo de defensa judicial y por lo mismo no se probó que las medidas cautelares en un eventual proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no sean eficaces, luego no se cumplen los presupuestos para que sea procedente la acción de tutela, ni siquiera de manera transitoria, lo que lleva a que declarar su improcedencia.

No obstante, lo anterior hay lugar a exhortar a la accionada Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, para que en su competencia y términos razonables adopte de manera diligente la resolución de las solicitudes de exclusión, cuya resolución incide en la convocatoria y/o citación a audiencia de escogencia de ubicación o plazas de quienes forman parte del registro de elegibles que da cuenta la Resolución No. 1353 del 19 de febrero de 2026<sup>14</sup>, requerimiento que en el mismo sentido se efectuó en sentencia de 6 de abril de 2026, proferida dentro de la Acción de Tutela con radicado No. 150013160001-2026-00120-00.

## **V. Decisión:**

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA ORALIDAD DE TUNJA**, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

---

<sup>13</sup> Sentencia T-456 de 2022

<sup>14</sup> “Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer Quinientas setenta y siete (577) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Código 2003, Grado 14, identificado con el Código OPEC No. 221268 perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Ministerio del Trabajo, en el marco del Proceso de Selección No. 2618 de 2024”.

**Resuelve:**

**Primero: NEGAR por IMPROCEDENTE** la presente acción de tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

**Segundo: EXHORTAR** a la accionada Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, para que en su competencia y términos razonables adopte de manera diligente la resolución de las solicitudes de exclusión, presentadas sobre el registro de elegibles que da cuenta la Resolución No. 1353 del 19 de febrero de 2026, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

**Tercero: DECLARAR** que el Ministerio del Trabajo carece de legitimación en la causa por pasiva respecto de las pretensiones formuladas en este proceso.

**Cuarto: NOTIFICAR** a las partes por el medio más expedito la determinación adoptada en este fallo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

**Quinto:** Contra este fallo procede la impugnación, el cual deberá interponerse en los tres (3) días siguientes a la notificación de este.

**Sexto:** Si este fallo no fuere motivo de impugnación, en firme envíense las diligencias ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo ordenado por los artículos 86 de la Constitución Política y 31 del Decreto 2591 de 1991.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
ROSALBA ALARCÓN GERENA  
Juez

/Wga



**Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura  
Juzgado Primero Laboral Circuito  
Funza - Cundinamarca**  
[j01lctofunza@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j01lctofunza@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
Carrera 11 N° 8-60 Piso 2. Barrio La Cita

PROCESO	ACCIÓN DE TUTELA
DEMANDANTE	IVONNE IVETTE JIMÉNEZ MORENO <a href="mailto:ivonijm.05.720@hotmail.com">ivonijm.05.720@hotmail.com</a>
DEMANDADAS Y VINCULADAS	MINISTERIO DEL TRABAJO <a href="mailto:notificaciones.tutelas@mintrabajo.gov.co">notificaciones.tutelas@mintrabajo.gov.co</a> COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC <a href="mailto:notificacionesjudiciales@cncs.gov.co">notificacionesjudiciales@cncs.gov.co</a>
RADICACIÓN	202610056

Funza, Cundinamarca., cuatro (04) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

La ciudadana **IVONNE IVETTE JIMÉNEZ MORENO** actuando en nombre propio, deprecó el amparo constitucional al derecho fundamental de petición presuntamente vulnerado por el **MINISTERIO DEL TRABAJO**.

#### **ANTECEDENTES**

Como fundamentos fácticos relató en síntesis que radicó derecho de petición a través de la página web del Ministerio del Trabajo el 9 de marzo de 2026 con PQRS: 02EE2026410600000027871, sin que a la fecha de interposición de la presente acción la entidad haya dado trámite a la misma.

#### **ACTUACIÓN PROCESAL**

Mediante auto calendarado 20 de abril de 2026 (pdf 05), se admitió la acción de tutela contra el **MINISTERIO DEL TRABAJO**, ordenando notificar a la encartada para que efectuara pronunciamiento frente a la presente acción y se ordenó la vinculación de **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC**.

#### **CONTESTACIÓN DE LA TUTELA**

##### **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**

La entidad se pronunció informando que no son competentes para atender la solicitud elevada por la accionante, que la inconformidad presentada es únicamente frente al Ministerio del Trabajo, por lo tanto, son los legitimados para suministrar la información requerida

Frente al concurso informó lo consignado en el aplicativo SIMO, en el que registra que el accionante superó las fases y hace parte de la Lista de Elegibles conformada mediante Resolución No. 1336 del 18 de febrero de

2026 para el empleo denominado SECRETARIO EJECUTIVO, Código 4210, Grado 21, identificado con el Código OPEC No. 219172, donde ocupa la posición No. 58, la cual cobró firmeza el 2 de marzo de 2026, de lo que se concluye que la accionante no ocupó posición meritoria en la lista ya que tan solo fueron ofertadas 8 vacantes.

Dicho lo anterior, solicitó negar el amparo deprecado frente a su representada, se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de la CNSC y en consecuencia se solicita la desvinculación de la entidad en el presente trámite constitucional ante la improcedencia de la misma.

## **MINISTERIO DEL TRABAJO**

La encartada se pronunció informando que, mediante oficio con radicado No. 02EE2026410600000027871 fue recibida petición bajo el radicado el 9 de marzo de 2026 requiriendo información de la planta de personal en el marco del Proceso de Selección 2618 de 2024, la cual fue atendida mediante radicado No. 08SE2026420300000019212 del 21 de abril de 2026 y notificada al día siguiente al correo electrónico informado por la demandante.

Por lo anterior, solicitaron la declaratoria de improcedencia de la presente acción ante la carencia actual de objeto por hecho superado.

## **PROBLEMA JURÍDICO**

¿De acuerdo con el escrito y contestación de tutela, entiende el Despacho que, en el presente asunto le corresponde establecer si se configura hecho superado por carencia actual de objeto, al haber emitido respuesta a la solicitud presentada por la accionante el 9 de marzo de 2026?

Expuesto así el debate jurídico propuesto, a la fecha se encuentra para tomar decisión de fondo, lo cual, procede a realizarse previas las siguientes:

## **CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

La acción de tutela se implantó en nuestro ordenamiento jurídico con la específica finalidad de otorgar a las personas la protección inmediata a los derechos constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de autoridad y, también por los particulares por los mismos motivos, pero en este último evento sólo en los casos taxativamente consagrados en la ley.

En primer lugar, debe recordarse que conforme lo dispone el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, llamado a proceder sólo frente a los casos particulares de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales por parte de las

autoridades o de particulares en los precisos casos establecidos por el legislador.

Tratándose del derecho de petición, es claro que, de acuerdo con su consagración normativa y la naturaleza de su núcleo esencial de protección, se trata de un derecho fundamental o de aplicación inmediata respecto del cual la acción constitucional mencionada es procedente cuando se verifique su vulneración.

## • **SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN**

La Constitución Política, en su artículo 23 consagra que *“toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”*.

Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y reiterativa la jurisprudencia constitucional, que ha establecido que el núcleo esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud. En este sentido, la H. Corte Constitucional ha manifestado:

*“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”<sup>1</sup>*

De los anteriores componentes jurisprudenciales, cabe destacar que el derecho de petición exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer decir con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición.

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-249 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo

## • **SOBRE EL CONCEPTO DE HECHO SUPERADO**

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional se ha entendido por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado.

Al respecto, en la Sentencia T-308 de 2003, se dijo lo siguiente:

*“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.”*

*“Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.”*

*“No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción”<sup>2</sup>.*

## **DEL CASO CONCRETO**

De acuerdo a los preceptos jurisprudenciales citados y, en atención a los documentos arrimados al paginario, se observa en primera medida que la accionante afirma haber radicado petición ante el MINISTERIO DEL TRABAJO con radicado No. 02EE2026410600000027871 el 9 de marzo de 2026, con el fin de obtener información del número de cargos existentes, su situación administrativa, las OPEC a las que pertenecen, la existencia de posibles equivalencias y el reporte de vacantes definitivas en relación con el empleo SECRETARIO EJECUTIVO Código 4210, Grado 21, la cual no había sido atendida por la accionada.

La entidad encartada al pronunciarse sobre la acción tuitiva de derechos fundamentales allegó respuesta frente a los tópicos descritos en el escrito tutelar e informó que la solicitud presentada por el quejoso fue debidamente atendida y notificada de forma electrónica a la dirección informada.

La CNSC como vinculada informó que la competencia para emitir respuesta a la solicitud elevada por la accionante radica única y exclusivamente a la accionada, ya que son los encargados de manejar y



administrar todo el tema de personal de dicha entidad, además que la misma fue dirigida directamente a estos, por lo tanto, solicitan su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Teniendo en cuenta los argumentos memorados y revisado el cuaderno tutelar, observa el Despacho que el **MINISTERIO DEL TRABAJO** por intermedio de la Subdirección de Gestión del Talento Humano emitieron respuesta a la solicitud elevada por la quejosa mediante comunicación No. 08SE2026420300000019212 del 21 de abril de 2026, la cual fue aportada con la contestación, respuesta que atiende la situación planteada, es de fondo, clara y congruente a lo requerido por el peticionario, y que le fue notificada en debida forma el 22 de abril de 2026 al correo electrónico informado para notificaciones judiciales [ivonijm.05.720@hotmail.com](mailto:ivonijm.05.720@hotmail.com) (fls. 36-48, pdf 09).

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud elevada ante el MINISTERIO DEL TRABAJO ha sido resuelta íntegramente, este Despacho considera que en el presente caso pese a haberse presentado vulneración por falta de respuesta pronta, la misma cesó, pues la respuesta resuelve la cuestión planteada y bajo ese contexto, se negará el amparo deprecado al derecho fundamental de petición.

Finalmente, frente a la vinculación de la Comisión Nacional Del Servicio Civil – CNSC, no se vislumbra ninguna vulneración a los derechos del accionante, razón más que suficiente para ordenar su desvinculación.

Sin más elucubraciones, el **JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE FUNZA, CUNDINAMARCA**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR LA TUTELA** al derecho fundamental de petición, por carencia actual de objeto por hecho superado, impetrada por **IVONNE IVETTE JIMÉNEZ MORENO** en contra del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: DESVINCULAR** a la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

**TERCERO: NOTIFICAR** esta decisión a los interesados por el medio más expedito posible (artículo 30 Decreto 2591 de 1991). advirtiéndole que la notificación personal se entiende surtida una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibido o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje, conforme lo prescribe el inciso 3° del artículo 8° de la ley 2213 de 2022 en concordancia con lo dispuesto en el art. 16 del Decreto 2591 de 1991.

**CUARTO:** La presente providencia podrá ser impugnada dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Si no fuere impugnada esta decisión, remítase a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,**

**La Juez,**



**MÓNICA CRISTINA SOTELO DUQUE**

JPZG



SENTENCIA DE TUTELA N° 045

TRAMITE:	ACCIÓN DE TUTELA
RADICADO:	18001310400120260043
ACCIONANTE:	JULIAN ESTEBAN RIVERA CRUZ
ACCIONADO:	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO

Florencia- Caquetá, lunes, 13 de abril de 2026

1. ASUNTO A TRATAR

Corresponde proferir sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela interpuesta por **JULIAN ESTEBAN RIVERA CRUZ**, contra la **COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO** por la presunta vulneración a su derecho de petición.

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Manifiesta la accionante que mediante petición formulada el día 26 de febrero de 2026 solicitó a las accionadas: “1. SOLICITO que el Ministerio del Trabajo, en coordinacion con la CNSC, proceda a ADICIONAR e INCLUIR de manera inmediata las tres (3) vacancias definitivas adicionales (2 en Huila y 1 en Santander) identificadas en el oficio del 23 de febrero de 2026, dentro de la oferta de plazas para la AUDIENCIA PU BLICA DE ESCOGENCIA de la OPEC 221270. 2. SOLICITO que, en virtud de la adición de estas plazas, el numero de vacantes a proveer se ajuste a un total de 35, permitiendo así que mi persona, al ocupar el puesto 35 de la lista de elegibles, sea formalmente CITADO a dicha audiencia publica para ejercer mi derecho a la escogencia de ubicacion geografica. 3. SOLICITO que, una vez finalizada la audiencia de escogencia y respetando el estricto orden de me rito, se proceda a efectuar mi NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA para el cargo de Auxiliar Administrativo, Co digo 4044, Grado 15, garantizando mi derecho fundamental de acceso a la carrera administrativa. 4. SOLICITO que se informe a este peticionario el estado actual del reporte de estas vacantes en el aplicativo SIMO y la fecha confirmada para la audiencia de escogencia donde se vera n reflejadas estas adiciones. 5. En caso de que alguna(s) solicitud(es) sea negada informar conforme a derecho corresponde la razon por la cual no se accede a mi peticion.” Sin embargo, refiere no haber recibido respuesta por lo que solicita se ordene hacer lo propio en el término de 48 horas.

3. TRAMITE PROCESAL

Recibida la solicitud de amparo, esta fue admitida por el despacho el día 24 de marzo de 2026, requiriendo a la accionada para que en un término de 2 días se pronunciara sobre los hechos y pretensiones señalados en la acción de tutela.

3.1. CONTESTACIÓN DE LA ACCIONADA - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL



Señaló que dio respuesta de fondo a la petición mediante oficio del 6 de abril de 2026, debidamente notificado al correo electrónico del accionante, razón por la cual alegó la configuración de una carencia actual de objeto por hecho superado.

Adicionalmente, la entidad informó que el accionante se encuentra inscrito en la lista de elegibles para el cargo de Auxiliar Administrativo (OPEC 221270), ocupando la posición 29, y que el proceso de provisión de vacantes y audiencias de escogencia se adelanta conforme a la normativa vigente y a los reportes efectuados por el Ministerio del Trabajo.

### **3.2 EL MINISTERIO DE TRABAJO TRABAJO**

Solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela al considerar que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que la petición presentada por el accionante el 26 de febrero de 2026 fue resuelta de fondo mediante oficio con radicado No. 08SE2026420100000014256 del 25 de marzo de 2026, el cual fue comunicado al correo electrónico del peticionario el 26 de marzo del mismo año.

Señaló que la respuesta emitida fue clara, completa, oportuna y congruente con lo solicitado, suministrando la información requerida en relación con el proceso de selección No. 2618 de 2024 y el manejo de las vacantes.

En ese sentido, sostuvo que durante el trámite de la acción de tutela se configuró la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto la presunta vulneración del derecho de petición desapareció al haberse dado respuesta al requerimiento del accionante de manera voluntaria antes de proferirse el fallo.

Finalmente, reiteró que la entidad ha actuado conforme a sus competencias constitucionales y legales dentro de los procesos de selección, por lo que no se evidencia vulneración de derechos fundamentales y, en consecuencia, la acción resulta improcedente.

## **4. CONSIDERACIONES**

### **4.1 Fundamentos jurídicos de la decisión**

#### **4.1.1.- Competencia**

Este Despacho es competente para dar trámite y resolver la acción de tutela antes reseñada, con base en la Constitución Política, artículo 86 y en el Decreto 2591 de 1991, artículo 37 y demás normas concordantes.

#### **4.1.2.- Legitimación activa**

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que



éstos resulten vulnerados o amenazados. En esta oportunidad, **JULIAN ESTEBAN RIVERA CRUZ**.

#### 4.1.3.- Legitimación pasiva

La **COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO TRABAJO** se encuentran accionadas por ser contra quienes se dirige la acción y por ser quienes tienen injerencia en los hechos descritos en la presente acción.

#### 4.1.4.- Examen de inmediatez

La inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela, creada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como herramienta para cumplir con el propósito de la Carta Política de hacer de la acción de tutela un medio de amparo de derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz.

En el caso bajo estudio refiere la accionante que la petición se elevó el día 26 de febrero de 2026 y la acción tutelar se interpuso el día 24 de marzo de 2026 por lo que la aparente transgresión era actual en el momento en que se hizo uso de la tutela para el amparo de los derechos.

#### 4.1.5 Principio de subsidiariedad

Finalmente, respecto del requisito de *subsidiariedad*, es preciso anotar que, visto el asunto *sub-judice*, el recurso de amparo es el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición<sup>[38]</sup>, si se tiene en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo, tal y como insistentemente lo ha señalado la Honorable Corte Constitucional<sup>[39]</sup>.

#### 4.1.6 Planteamiento del Problema Jurídico

Deberá este despacho determinar si la **COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO TRABAJO** vulneró el derecho fundamental de petición de **JULIAN ESTEBAN RIVERA CRUZ**.

### 5. FUNDAMENTACIÓN

El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y garantiza a toda persona la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una respuesta pronta y clara sobre lo pedido. Se trata de un derecho fundamental de carácter instrumental, pues de su ejercicio efectivo dependen en muchas ocasiones la protección y realización de otros derechos constitucionales. En un Estado Social de Derecho, el derecho de petición resulta determinante para la participación ciudadana y el control de la función pública, al permitir a los ciudadanos acceder a la información y a las decisiones de las autoridades que les conciernen.

La jurisprudencia constitucional ha delineado con precisión los elementos del núcleo esencial de este derecho. De acuerdo con la Corte Constitucional (Sentencia C-951 de 2014, reiterada entre otras en T-377 de 2021), el derecho de petición comprende cuatro elementos básicos: (i) la presentación de la petición por parte del ciudadano; (ii) la resolución pronta por parte de la autoridad; (iii) la obtención de una respuesta de fondo (es decir, sustantiva) por parte de aquella; y (iv) la notificación efectiva de la respuesta al peticionario. En consecuencia, la autoridad a quien se dirige una petición tiene el deber constitucional y legal de tramitarla y contestarla integralmente dentro del término establecido, sin evasivas ni dilaciones. El término general de respuesta, salvo normas especiales, es de 15 días hábiles, conforme a la Ley 1755 de 2015. Este plazo legal debe entenderse como el tiempo máximo del que dispone la administración para resolver la solicitud; cualquier demora injustificada más allá de ese límite vulnera el derecho fundamental de petición.

### 5.1 Del caso concreto

El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, garantiza a toda persona la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y obtener una respuesta pronta, clara, de fondo y congruente con lo pedido, dentro de los términos legales establecidos. En igual sentido, el artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) prevé que las autoridades deben resolver las peticiones en un término no superior a quince (15) días hábiles, salvo disposición especial.

En el sub judice, tanto el **MINISTERIO DEL TRABAJO** como la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC** acreditaron haber dado respuesta de fondo a la petición elevada por el accionante el día 26 de febrero de 2026. En lo que respecta al Ministerio del Trabajo, se evidenció que mediante oficio con radicado No. 08SE2026420100000014256 del 25 de marzo de 2026, comunicado al correo electrónico del señor JULIÁN ESTEBAN RIVERA CRUZ el 26 de marzo de 2026, se atendió la solicitud dentro del término legal.

En dicha comunicación, el Ministerio brindó una respuesta clara, detallada y congruente con lo solicitado, explicando el estado del proceso de selección No. 2618 de 2024, el número de vacantes ofertadas, la existencia de cargos adicionales y las reglas aplicables para su provisión, precisando que tales actuaciones se encuentran sujetas a la normativa vigente y a los procedimientos propios de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Por su parte, la Comisión Nacional Del Servicio Civil – Cnsc igualmente emitió respuesta de fondo a la solicitud del accionante, en la cual informó sobre el trámite del proceso de selección, el uso de listas de elegibles y las condiciones bajo las cuales pueden proveerse vacantes adicionales, indicando que la provisión de los cargos debe realizarse conforme al estricto orden de mérito y a las etapas propias del concurso, sin que resulte procedente anticipar decisiones por fuera del procedimiento establecido.

De igual forma, las entidades accionadas aportaron constancias de envío de las respuestas al correo electrónico suministrado por el accionante, lo que permite tener





por acreditado no solo que se emitieron respuestas de fondo, sino también que estas fueron debidamente comunicadas, satisfaciendo así el núcleo esencial del derecho fundamental de petición.

En consecuencia, encuentra este Despacho que estamos en presencia de la figura jurídica de un hecho superado frente al derecho de petición reclamado, en virtud que el motivo de presentación de la acción de tutela desapareció, configuración que el Alto Tribunal Constitucional definió en sentencia T - 146 de 2012 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, así:

*“Esta Corporación ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado.*

*En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que “(...) si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.”*

*En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales.*

*De este modo, se entiende por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado.”*

Así las cosas, esta judicatura dará aplicación a la figura de carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto al derecho de petición.

## 6. LA DECISIÓN JUDICIAL

Por lo expuesto anteriormente, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

### RESUELVE

**PRIMERO: NEGAR** la tutela interpuesta por **JULIAN ESTEBAN RIVERA CRUZ** frente al derecho de petición por carencia actual de objeto por hecho superado conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.





Juzgado Primero Penal Del Circuito  
Avenida 16 No. 6-47 Palacio de Justicia Cuarto Piso, oficina 405  
[jpencfl@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jpencfl@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
Florencia- Caquetá

**SEGUNDO: NOTIFICAR** esta providencia a las partes, en la forma prevista en el art. 30 del Decreto 2591 de 1991.

**TERCERO:** Contra la presente providencia procede el recurso de impugnación en el acto de notificación o dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. En caso de no ser impugnada la presente providencia, **REMÍTASE** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. –**

**JOHANA DUQUE GONZALEZ**

**Jueza**

Firmado Por:

**Johana Duque Gonzalez**

**Juez**

**Juzgado De Circuito**

**Penal 001**

**Florencia - Caqueta**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **51881e36b81f2a4a3f07a382ffbadb20fefa09f0aba463c3ce0b75e28acae1bd**

Documento generado en 13/04/2026 06:08:23 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**